

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS

(CH-0164)

Resumen Ejecutivo

**Prestatario y
Garante:** República de Chile

Agencia ejecutora: Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN)

Monto y fuente:	<u>FASE I</u>	<u>FASE II</u>	<u>TOTAL</u>
IDB (CO):	US\$34,8	US\$45,2	US\$ 80,0 millones
Local:	<u>US\$23,2</u>	<u>US\$30,2</u>	<u>US\$ 53,4 millones</u>
Total:	US\$58,0	US\$75,4	US\$133,4 millones

**Términos y
condiciones:**

Plazo Amortización:	25 Años
Período de Gracia	4 Años
Período de Desembolso:	4 Años
Tasa de Interés:	variable
Inspección y vigilancia:	1 %
Comisión de crédito:	0,75 %
Moneda:	Dólares de los Estados Unidos de la Facilidad Unimonetaria.

**Modalidad
Multifase** Se acordó que el Programa, debido a su carácter novedoso y su complejidad, requerirá más de un ciclo de proyecto, por lo cual tendrá una modalidad de multifase (pár. 1.31).

Objetivos: El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural, en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

Los objetivos específicos son: (i) mejorar las capacidades y oportunidades de los beneficiarios en el ámbito productivo, educativo, y de salud; (ii) fortalecer a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y a las comunidades indígenas beneficiarias del Programa en materia de desarrollo integral con identidad mediante una gestión participativa; y (iii) institucionalizar la temática indígena en los distintos sectores, creando capacidades en los organismos públicos para que la atención a las poblaciones indígenas sea articulada, adecuada y con pertinencia cultural.

Descripción: El Programa tiene un carácter integral, intersectorial y participativo. Consta de los siguientes cinco componentes:

1. Componente de fortalecimiento de las comunidades indígenas e instituciones públicas (US\$6,3 millones)

Para beneficiar a las *comunidades indígenas*, se prevé financiar talleres de planificación participativa, cursos/talleres de capacitación y asistencia técnica a las comunidades en áreas tales como: (i) administración, gestión, desarrollo organizacional, planificación y seguimiento de actividades; (ii) oferta de recursos públicos y presentación de propuestas; (iii) resolución de conflictos; (iv) liderazgo de la mujer y temas de género; y (v) participación de la juventud. Para lograr que las intervenciones de desarrollo tengan pertinencia cultural y se modifiquen las prácticas laborales de los funcionarios de los organismos involucrados en el Programa, se financiarán cursos de capacitación y sensibilización. Asimismo, se financiarán acciones dirigidas a: (i) mejorar la capacidad técnica y organizacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); (ii) apoyar la gestión técnica del Consejo de la CONADI; (iii) incorporar el componente étnico en las políticas públicas; y (iv) apoyar el trabajo de la “Comisión de Verdad y Nuevo Trato”.

2. Componente de desarrollo productivo (US\$19,7 millones)

Se financiarán actividades agrupadas en cuatro subcomponentes: (i) *fomento de actividades productivas rurales*, financiando proyectos orientados a mejorar la rentabilidad de actividades agropecuarias, diversificar las fuentes de ingreso de las familias, desarrollando actividades no agrícolas y mejorando la gestión de los recursos naturales; (ii) *apoyo a las comunidades*, con el propósito de mejorar la calidad de los proyectos de inversión y el acceso a servicios económico-productivos, como garantía de mayor efectividad y sostenibilidad de los mismos; (iii) *apoyo a la generación de proyectos y a la promoción de inversiones en zonas indígenas*, para identificar proyectos y financiamiento público y privado; y (iv) *apoyo a las agencias estatales de fomento productivo*, para dar acompañamiento a las actividades del Programa en el área de desarrollo productivo.

3. Componente de educación y cultura (US\$11,7 millones)

Para desarrollar el *subcomponente de promoción del desarrollo de la cultura y el arte* se financiarán: (i) propuestas culturales de las comunidades indígenas; y (ii) desarrollo de eventos. El *subcomponente de educación intercultural bilingüe* (EIB) financiará: (i) el fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación [(MINEDUC)

Programa EIB]; (ii) la socialización y difusión de la EIB hacia la familia, las comunidades y los organismos del Estado; (iii) el desarrollo y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientado a la EIB en forma participativa; (iv) el desarrollo curricular; (v) el desarrollo profesional docente; (vi) los recursos de aprendizaje; (vii) las investigaciones aplicadas, de acción y de base vinculadas a lo pedagógico y al seguimiento del Programa; (viii) el sistema de evaluación de los aprendizajes; (ix) el fomento al desarrollo de iniciativas locales; (x) la televisión educativa; y (xi) la educación de jóvenes y adultos en el marco de una educación intercultural.

4. Componente de salud intercultural (US\$6,7 millones)

A través del componente de salud se financiarán acciones específicas de asistencia técnica, sensibilización y capacitación, encuentros y seminarios, difusión y mercadeo social, e inversiones en obras y equipos en sus cuatro subcomponentes: (i) *modelos de atención de salud intercultural de referencia*, contruidos a partir de experiencias de salud intercultural existentes en Chile; (ii) *mejoramiento de la calidad, sensibilidad y pertinencia cultural de servicios de salud*, a través de actividades de sensibilización, información y capacitación a los funcionarios de diez servicios de salud; (iii) *fortalecimiento de la medicina indígena*, en el marco de un modelo de atención intercultural, para lo cual se financiarán encuentros entre agentes de la medicina indígena y se promoverá la formulación de sus propuestas; y (iv) *mejoramiento del acceso a la red de servicios interculturales de salud*, para lo cual se financiarán proyectos provenientes de las comunidades indígenas.

5. Componente de mercadeo social (US\$1,1 millón)

Con el objetivo de difundir y promover el Programa se financiará el diseño y la implementación de una estrategia informativa y comunicacional, donde se definan las ideas matrices y los tipos de mensajes para cada uno de los públicos objetivos involucrados, es decir, los potenciales beneficiarios, los involucrados en el Programa y la opinión pública. A pesar de que la estrategia estará dirigida a distintos públicos objetivos, su foco central se situará en el universo de usuarios actuales y potenciales del Programa y su entorno.

Estrategia del Banco en el país y sector:

La estrategia del Banco en Chile tiene como principal objetivo apoyar el aumento de la competitividad, la reducción de desigualdades sociales y regionales, así como la profundización de su democracia mediante el fortalecimiento de una sociedad más participativa y un Estado más moderno.

El Programa propuesto se enmarca dentro de esta estrategia, que específicamente resalta la necesidad de reducir la exclusión social de las poblaciones indígenas utilizando metodologías participativas que involucren a las comunidades en las etapas de diseño, ejecución y evaluación. Asimismo, es congruente con el interés del Banco en promover un crecimiento económico con equidad social y por lo tanto, en intervenir para reducir la exclusión social de los grupos étnicos.

Revisión social y ambiental:

Al estar este Programa focalizado en la población indígena se está promoviendo directamente la equidad social, beneficiando con ello a las comunidades, familias, mujeres y jóvenes indígenas, proporcionándoles servicios más pertinentes a su cultura y reduciendo la discriminación que los afecta. Asimismo, el Programa contribuirá a promover la equidad de género una vez que los estudios demuestren la situación específica de las mujeres en las comunidades participantes.

El Programa incluye un Procedimiento Ambiental, anexo al Reglamento Operativo (RO), que determina las responsabilidades institucionales y fortalecimiento institucional ambiental de las instituciones asociadas al Programa: (i) financiamiento de planes de educación ambiental en las 600 comunidades participantes; (ii) criterios de protección ambiental de proyectos; (iii) planes de manejo y conservación de recursos naturales de las ADI; y (iv) metas e indicadores ambientales para el Programa (ver pár 4.6 al 4.16).

Beneficios:

Este Programa fomentará la equidad social y promoverá el desarrollo económico y social y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, así como la capacidad de liderazgo de mujeres y jóvenes. Los beneficios del Programa no sólo serán materiales, sino también serán aquéllos que fortalezcan y desarrollen la cultura de las comunidades indígenas participantes, y promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad chilena. Un beneficio importante será el establecimiento de un modelo de intervención, articulado, participativo, que responda eficazmente a las demandas de las familias indígenas y aumente la eficiencia de los recursos públicos. Como consecuencia del proceso participativo iniciando durante el diseño del Programa, el fortalecimiento del diálogo entre el Estado y las Comunidades Indígenas, constituirá en sí un beneficio al aumentar la confianza entre las partes y con ello, las posibilidades de éxito e impacto de éste y de otros programas futuros. Finalmente, se espera que las intervenciones de capacitación y sensibilización provoquen una reducción en las situaciones de racismo y discriminación existentes en el país.

Riesgos:

El éxito de este Programa está sujeto a la voluntad del gobierno chileno de construir una mejor relación y comunicación con las poblaciones indígenas, reconociendo la especificidad de su cultura y de sus problemas y además, de otorgarle una continuidad en el tiempo. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos sectores no respeten los principios de este Programa, es decir, participación, articulación intersectorial, transparencia e información. A nivel individual, los funcionarios públicos podrían manifestar actitudes de discriminación hacia las culturas indígenas, situación que afectaría el nivel de participación y de confianza de los beneficiarios. Entre las medidas de mitigación de este riesgo se contemplan actividades de sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos y sobre todo, se está promoviendo desde la etapa de diseño un alto nivel de involucramiento y de compromiso.

Un segundo riesgo está asociado a la intersectorialidad del Programa, lo cual implica que la ejecución sea compleja, con una alta participación de diversas entidades públicas que tienen prácticas institucionales distintas. Este riesgo será mitigado tanto por el compromiso de las entidades participantes, el que se reflejará en Convenios que deberá firmar cada una de ellas con MIDEPLAN, así como en el trabajo de coordinación intersectorial al interior de los comités del Programa.

Por otro lado, especialmente entre la población mapuche, cuya organización social es fragmentada, existe el riesgo de que no se logre una articulación efectiva entre los niveles descentralizados del Estado y la organización social tradicional indígena, lo que dificultaría la ejecución del Programa. Para minimizar este riesgo, el Programa ofrecerá actividades de capacitación y de fortalecimiento de las organizaciones indígenas y, enfatizará la creación de una institucionalidad efectiva a nivel de las ADI.

Condiciones contractuales especiales:

Las condiciones previas al primer desembolso serán: (i) la constitución del Comité de Coordinación (CC) y de su operatoria así como de la Secretaría Ejecutiva (SE) (pár.3.4 y 3.6); y (ii) la vigencia del Reglamento Operativo del Programa (pár. 3.15); (iii) la contratación del personal de la SE conforme a la cláusula 3.02.c del Contrato de Préstamo (ver pár. 3.6). Como condición previa para iniciar la *ejecución individual* de cada componente se requerirá la firma del Convenio entre MIDEPLAN y el correspondiente organismo responsable de su coejecución (pár. 3.2).

Clasificación del sector social y de la pobreza:

Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB-1704). También esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza PTI. El prestatario optó por no utilizar el 10 por ciento de financiamiento adicional (pár. 4.1).

Excepciones a las políticas del Banco: N/A

Adquisiciones: En conformidad con la política del Banco, en el caso de adquisición de bienes y servicios o en el caso de ejecución de obras, se adoptarán los procedimientos vigentes, los que formarán parte integral del contrato de préstamo. Para las contrataciones de servicios de consultoría se seguirán los procedimientos indicados en el Documento GN-1679-3. La licitación pública internacional será obligatoria para las adquisiciones cuyo valor sea superior a US\$5 millones en el caso de contratos para la ejecución de obras; a US\$350 mil en el caso de contratos para la adquisición de bienes; y a US\$200 mil en el caso de contratos de consultorías. La ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios por montos inferiores, se regirán por la legislación nacional.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Situación socioeconómica

- 1.1 En Chile, según el Censo de 1992, cerca de un millón de personas mayores de 14 años declararon pertenecer a culturas indígenas, es decir, el 12% del total de la población de ese grupo de edad es indígena. El 81% de quienes se consideran indígenas corresponden a la etnia mapuche, el 14% a la aymara y aproximadamente el 2% a la atacameña. La población de niños y jóvenes es muy alta entre los mapuches (57%) y aymaras (39%). Las regiones con mayor concentración de población indígena rural son la de Tarapacá (I), de la Araucanía (IX) y de los Lagos (X). El 40% del total de los indígenas habitan en la región metropolitana. A pesar de que la proporción de indígenas que viven en zonas urbanas es muy alta, el Gobierno de Chile ha decidido que este Programa atenderá únicamente a la población indígena atacameña, aymara y mapuche del sector rural y atenderá a las otras etnias a través de otros mecanismos o programas.
- 1.2 Existen importantes diferencias en términos climáticos y topográficos entre las regiones del norte Tarapacá y Antofagasta (I y II), donde viven las poblaciones aymaras y atacameñas, y las del sur de Chile Bío-Bío (VIII), de la Araucanía (IX) y de Los Lagos (X), donde vive la población mapuche. Este es un factor importante para explicar las diferentes problemáticas y necesidades existentes. Por ejemplo, mientras en el norte el clima es desértico y, por lo tanto, el agua constituye un recurso escaso para las comunidades rurales, en el sur la pluviometría anual oscila entre los 1.000 mm y 3.000 mm.
- 1.3 En términos de pobreza, los datos provenientes de la Encuesta Socioeconómica de familias de 1998 dan cuenta de una severa brecha entre la población indígena y no indígena en el país. En promedio, la población indígena es más pobre que la no-indígena (35,6% vs 22,6%), viviendo un 10,6% de ésta en condiciones de indigencia (5,5% en el caso de la población no indígena). En la I región la proporción de pobres entre la población aymara es 13% mayor que a nivel regional. En la II región, donde se concentran casi el 50% de los atacameños, el indicador de pobreza es de 22% entre la población indígena y de 17% a nivel regional. En la IX región el indicador de indigencia entre la población mapuche es 15% superior al indicador regional. En cambio, en la región metropolitana la diferencia es menor: la indigencia es de 3,1% entre los mapuches y 2,7% a nivel regional.
- 1.4 En relación a la situación de la mujer indígena, la información existente señala que ésta debe emigrar muy joven a la ciudad en busca de empleo remunerado, con frecuencia en servicio doméstico. En general, tiene una alta participación en el trabajo agrícola no remunerado y en explotaciones productivas de subsistencia. Por otra parte, la fecundidad entre las mujeres indígenas es más alta que entre las mujeres no indígenas del área rural y la carga de trabajo doméstico constituye una de las limitaciones para participar en funciones de liderazgo. Hay manifestaciones de mucho interés de mujeres indígenas entrevistadas por participar en el ámbito comercial y de la microempresa y de recibir apoyo para mejorar sus capacidades de liderazgo.

B. Problemática indígena por sector y área de intervención

- 1.5 En la IX región se concentra el mayor número de comunidades indígenas en el país. Esta región tiene aproximadamente 335 mil habitantes en las áreas rurales, de las cuales aproximadamente el 62% pertenece a la etnia mapuche. Las condiciones de infraestructura han mejorado notablemente en la última década, particularmente en cuanto a energía eléctrica, caminos secundarios y servicios básicos.
- 1.6 En relación al *sector productivo*, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un 75% de la población indígena rural económicamente activa está dedicada a la actividad agropecuaria. Esta actividad está concentrada en la producción de cereales, principalmente trigo, y ganadería. Estos productos vienen experimentando una baja sistemática en su rentabilidad económica. Una serie de factores contribuyen a esta situación: (i) los rendimientos de subsistencia generados por la aplicación de técnicas agrícolas tradicionales sobre tierras de baja calidad, alta fragilidad ambiental o sin acceso a recursos hídricos dependiendo de la zona; (ii) la tendencia a la baja de los precios al productor de trigo, leche y carne; y (iii) la existencia de minifundios que impide aprovechar economías de escala para la comercialización y el aprovechamiento de tecnologías avanzadas intensivas en capital. A las limitaciones anteriores se agregan los bajos niveles de educación de los grupos indígenas rurales que no sólo les impide mejorar la gestión en sus predios, sino que además les dificulta el acceso a fuentes de empleo en sectores no agropecuarios. Considerando que aproximadamente el 60% de los ingresos de estas familias provienen de actividades agropecuarias, la baja rentabilidad de la agricultura tradicional explica los bajos niveles de ingreso, y por ende, los niveles de pobreza de las poblaciones indígenas en el área rural.
- 1.7 Con el objetivo de mejorar la situación socioeconómica en las áreas rurales, el Gobierno de Chile ha buscado hacer partícipe a estas poblaciones de la amplia gama de servicios de fomento productivo silvoagropecuario que ofrece al sector campesino y de pequeños productores. Los principales servicios incluyen: (i) líneas de crédito de corto y largo plazo bajo condiciones preferenciales para la capitalización de pequeños agricultores; (ii) apoyo técnico y financiero para construcción, rehabilitación o modernización de obras (individuales o comunitarios) de riego y drenaje; (iii) mejoramiento de unidades productivas ganaderas vía un subsidio a las inversiones en infraestructura y equipo, (iv) apoyo a actividades destinadas a la recuperación de suelos degradados; (v) apoyo técnico y financiero para la forestación y manejo de bosques; y (vi) servicios de asesoría técnica, provisión de tecnología, capacitación en gestión empresarial y fortalecimiento de organizaciones productivas.
- 1.8 Además, el gobierno ha venido ejecutando diversos proyectos especiales para sectores vulnerables financiados con recursos de organismos internacionales (e.g., Programa de Desarrollo de Comunas Pobres del Secano, Programa de Promoción de la Participación Económica Productiva de las Mujeres Rurales). La agencia que concentra los esfuerzos estatales en el área es el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), con excepción de la asistencia técnica y legal en materia de desarrollo forestal que está bajo la responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). En términos de programas de desarrollo productivo con

focalización étnica, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) administra el Fondo de Tierras y Agua (FTAI) y el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). El monto anual promedio ejecutado bajo estos programas de fomento productivo dirigidos hacia el sector de pequeños productores y campesinos en los últimos dos años fue de alrededor de US\$155 millones. Considerando que existen alrededor de 240 mil familias que son pequeños productores, el apoyo estatal por familia fue de US\$645 anuales.

1.9 En general, las poblaciones indígenas vienen accediendo a muchos de estos programas estatales. Por ejemplo, en la IX región, de unos 10.300 productores que reciben asistencia técnica del INDAP, se estima que el 70% son indígenas. Asimismo, de 12.500 créditos colocados por esta agencia, unos ocho mil son de campesinos mapuches. Sin embargo, estudios existentes indican que todavía existen deficiencias en las siguientes áreas que están afectando la provisión de los servicios productivos de apoyo:

- a. *Focalización:* Los instrumentos de política utilizados por el Estado para fomentar el desarrollo productivo en áreas rurales se han focalizado principalmente hacia la agricultura orientada al mercado. Esta focalización no permite un acceso pleno a los servicios de apoyo del Estado de todos los grupos o comunidades rurales, especialmente de aquellos con bajo grado de articulación externa, dedicados a la auto-subsistencia y actividades no agropecuarias.
- b. *Efectividad:* A pesar que los recursos para los servicios estatales de apoyo se han incrementado en cerca de 2,6 veces en la última década, no se conoce el impacto socioeconómico de estas intervenciones. Se considera que la amplia gama de servicios estatales de apoyo productivo ha contribuido a mejorar la situación socioeconómica de ciertos sectores campesinos como resultado de la apertura económica y la caída de precios internos de los productos tradicionales. Sin embargo, indicadores como la actual tasa de morosidad de los servicios de crédito público (cerca del 21% en general) demuestran que los recursos públicos no estarían siendo asignados de manera eficiente en todos los casos. Si bien las agencias públicas verifican el cumplimiento de metas por medio de indicadores físicos de gestión, éstos no son suficientes para medir su impacto real sobre la calidad de vida de los beneficiarios.
- c. *Participación:* Muchos servicios estatales tienen una insuficiente participación de los beneficiarios en la identificación, diseño, formulación, implementación, supervisión y evaluación de los proyectos.
- d. *Pertinencia.* Los múltiples servicios estatales de fomento dirigidos hacia subsectores puntuales y con lógicas organizacionales particulares obligan a los beneficiarios a presentar proyectos que no responden a una visión de desarrollo integral y cultural de las comunidades o grupos de interés. En el caso de los grupos indígenas, éstos consideran que los servicios estatales no toman en cuenta la especificidad cultural de sus pueblos ni sus tradiciones.

1.10 Estas deficiencias en los servicios estatales de apoyo no han permitido una distribución homogénea de sus posibles beneficios entre los distintos actores del

mundo rural chileno. Esto es más evidente en el caso de los grupos indígenas, cuyos niveles de ingreso son relativamente inferiores a los de otros grupos campesinos o de pequeños productores.

- 1.11 En el *sector educación*, según datos de la encuesta CASEN de 1996, el promedio de escolaridad de la población indígena es de 7,4 años, inferior en 2,2 años a los observados en la población no indígena. La tasa de analfabetismo alcanza al 10%, cifra muy superior a la registrada por la población no indígena, que apenas alcanza el 4,7%. Entre los jóvenes indígenas menores de 25 años la tasa de asistencia al sistema educacional es de 54,9%, mientras que entre los no indígenas que pertenecen a ese grupo de edad es 61,6%.
- 1.12 Desde el año 1990 el gobierno viene implementando una profunda reforma de su sistema educativo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados, los programas de mejoramiento impulsados han contemplado sólo parcialmente la existencia de una diversidad lingüística entre los escolares chilenos. Hay consenso entre las actuales autoridades del sector que los principales problemas que enfrenta la población indígena en el ámbito educativo son: (i) planes y programas de estudio no pertinentes a la diversidad cultural y lingüística del país; (ii) insuficiencia de profesores formados y capacitados para impartir la educación bilingüe; (iii) muchos textos escolares no consideran la cosmovisión de los pueblos indígenas; (iv) los materiales de aprendizaje distribuidos por la reforma educacional son ajenos a la realidad sociocultural de los niños y niñas indígenas; (v) no existe información específica acerca de la población escolar indígena del país, lo que impide conocer, en términos de tasas de matrícula, repitencia y deserción la situación de dicha población; y (vi) falta una mayor participación de la comunidad en la gestión escolar. Estos problemas fueron ampliamente considerados en el diseño del Programa aquí propuesto.
- 1.13 En el *sector salud*, se observan desigualdades importantes en las condiciones de salud entre las poblaciones indígenas y el resto de la población chilena, asociadas tanto a las barreras físicas y culturales de acceso a los servicios de salud en territorios indígenas como a la poca sensibilidad del personal hacia la cultura y tradiciones de la población indígena. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es considerablemente mayor entre los indígenas que a nivel nacional. La esperanza de vida es notablemente menor entre los indígenas (65 años) que a nivel nacional (72 años). Se ha detectado en los establecimientos de salud que el personal desconoce prácticas médicas y tradiciones de las poblaciones indígenas, problema que debe ser superado para que haya un aumento de usuarios indígenas en los servicios preventivos y curativos. Asimismo, se estima necesario tener en consideración experiencias de salud que han logrado incorporar un enfoque intercultural en la atención y ofrecer un trato respetuoso a la población indígena, incorporando además sus conocimientos y tradiciones a las tareas rutinarias de los establecimientos de salud.
- 1.14 A partir de 1960 existe en Chile la figura del facilitador intercultural, aunque recién en los años 90 han sido formalizados. Su rol es importante en el apoyo a los pacientes en las consultas médicas. El Ministerio de Salud creó en 1996 el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), cuyos lineamientos

estratégicos apuntan a mejorar la accesibilidad, calidad y capacidad resolutive de la atención pública, la sensibilidad a las tradiciones y demandas de la población indígena, la participación comunitaria en la evaluación y solución de problemas de salud, y su articulación con los agentes de salud indígenas.

C. Estrategia y respuesta estatal en la temática indígena

- 1.15 A partir de 1990, las distintas administraciones del Estado han adoptado una serie de medidas para responder a las solicitudes y demandas de las poblaciones indígenas. En octubre de 1993 se aprobó la Ley Indígena (19.253), que reconoció las distintas etnias en el país y el deber del Estado y de la sociedad de respetar, proteger y promover el desarrollo de las tierras, culturas y comunidades indígenas. Los principales instrumentos que permiten ejecutar la Ley y, que se describen a continuación, son los siguientes: (i) CONADI; (ii) disposiciones permanentes de protección jurídica; (iii) FTAI; (iv) FDI; y (v) Áreas de Desarrollo Indígena (ADI).
- 1.16 La CONADI es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente de MIDEPLAN. Su sede está en la ciudad de Temuco en la IX región, donde hay mayor concentración de población indígena. Además cuenta con un total de nueve oficinas y subdirecciones. La CONADI tiene un Consejo presidido por el Director Nacional y compuesto por: (i) Subsecretarios de cinco Ministerios; (ii) ocho representantes indígenas de las diferentes etnias; y (iii) tres consejeros designados por el Presidente de la República.
- 1.17 El FTAI subsidia la adquisición y/o regularización de tierras y derechos de aguas, y financia obras de riego. El Estado, a través del FTAI y del Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado cerca de 130 mil hectáreas a aproximadamente dos mil familias mapuches. Dichas tierras no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas pertenecientes a una misma etnia. La tierra y el agua tienen un valor crucial para las comunidades indígenas, en términos de su identidad cultural y de su desarrollo. En general, los indígenas no miden su bienestar en términos de ingresos o propiedades, sino en base a otros valores determinados por su cosmovisión y la reproducción de su cultura. En este sentido, la tierra en sí, independientemente de su capacidad o uso productivo, constituye un beneficio. Como demostración del alto compromiso de la administración actual, el gobierno se puso como meta entregar un total de 150 mil hectáreas entre los años 2000 y 2005. En materia de subsidio para obras de riego, se han ejecutado aproximadamente 1.200 proyectos, beneficiando a aproximadamente 12 mil familias indígenas. La CONADI ha subsidiado a través de este fondo un total de aproximadamente US\$45 millones entre los años 1994 y 1999, y US\$16 millones en el año 2000.
- 1.18 El FDI tiene como función específica ampliar, proteger y velar por la adecuada explotación de las tierras indígenas. Específicamente, busca fortalecer el patrimonio indígena en lo referente a tierras, aguas e infraestructura de riego. Financia programas especiales para mejorar las unidades productivas, planes de créditos, equipos agrícolas, caminos secundarios, eventos y otros. Entre 1994 y 1999 se invirtieron aproximadamente US\$15 millones, beneficiando a más de

50 mil personas indígenas. Adicionalmente, durante este período el gobierno entregó un total de 42 mil becas a estudiantes indígenas de enseñanza básica, media y superior, constatándose un notable incremento anual (cinco mil becas en 1994, llegando a 14 mil en 1999).

- 1.19 Las ADI son *“espacios territoriales en los cuales han vivido ancestralmente los pueblos indígenas y donde los organismos de la administración del Estado deberán focalizar su acción de manera adecuada y mancomunada en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades”*. Hasta el momento se han creado tres ADI en la II, VIII y IX región, pero hay dos en proceso de constitución, una en la VIII región y otra en la I región. Los criterios para su constitución son los siguientes: (i) espacios territoriales donde los pueblos indígenas hayan vivido ancestralmente; (ii) alta densidad de población indígena; (iii) existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas; y (iv) homogeneidad ecológica y dependencia de recursos naturales que permita mantener el equilibrio natural de las cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. Para la constitución de las ADI se realiza un diagnóstico o línea de base que permite orientar las inversiones.
- 1.20 Los grandes campos de acción de la CONADI son la ejecución de los fondos mencionados y diversos servicios de utilidad pública entre los que cabe mencionar: (i) acreditación de calidad de indígena; (ii) defensoría jurídica; (iii) conciliación; (iv) registro público de tierras indígenas; (v) registro de comunidades indígenas y asociaciones indígenas; y (vi) orientación a los usuarios beneficiarios respecto de los derechos y oportunidades con la Ley Indígena e información y difusión a través de medios de comunicación. En todas estas áreas la CONADI ha ido desarrollando una capacidad institucional y organizacional que presenta debilidades por ser una institución nueva que se ocupa de una temática que no ha sido abordada desde una perspectiva intercultural y de discriminación positiva por parte del Estado de Chile.
- 1.21 Algunas de las principales áreas señaladas como críticas son: (i) la inclusión del tema indígena dentro del Estado y complementariedad de la acción con los servicios públicos; (ii) coordinación interna y trabajo en equipo; y (iii) disponibilidad, oportunidad y accesibilidad de la información; y (iv) definición de manuales de procedimiento y funciones. De acuerdo a diagnósticos existentes, el mundo indígena tiene altas expectativas en el desempeño de la CONADI, las que aún no se han logrado satisfacer. Esta es una de las áreas en las cuales se pretende trabajar con el Programa propuesto.
- 1.22 Desde 1999 en adelante, la acción gubernamental ha buscado mayor acercamiento a la población indígena por medio de “diálogos comunales” en sectores mapuches (1999) y de la “mesa de trabajo para los pueblos indígenas” del año 2000, con el objeto de conocer y procesar sus demandas y buscar alternativas de solución que involucren al conjunto de la institucionalidad pública. Asimismo, existen “Mesas Regionales de Trabajo para el Desarrollo Indígena” presididas por los Intendentes, con participación de dirigentes de los pueblos indígenas en el seguimiento de medidas comprometidas por el gobierno. Como las necesidades específicas de las mujeres no están reflejadas, recientemente se han conformado “Mesas de Trabajo para las Mujeres Rurales” con el objetivo de promover la identificación y

sistematización de sus necesidades, intereses y demandas, así como de implementar políticas, planes y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades. Entre los representantes de la sociedad civil, participan representantes de mujeres indígenas y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.

- 1.23 Entre las principales demandas se destaca el reconocimiento de la educación intercultural en todo el país y la protección y preservación del patrimonio indígena, la cual será atendida a través del componente de educación y cultura. En el sector salud se demanda específicamente el aumento de las postas en zonas rurales y de las rondas médicas en lugares aislados, para lo cual se realizarán intervenciones dirigidas a ofrecer estos servicios con pertinencia cultural, lo que implica la consideración de prácticas y dinámicas tradicionales de las comunidades indígenas. Otra demanda proveniente de las mesas de trabajo se refiere a la necesidad de sensibilizar al conjunto de la sociedad en torno a la tolerancia y a la aceptación de la diversidad, intervenciones que están siendo consideradas en el diseño del Programa. En relación a la gestión territorial y de desarrollo de tierras indígenas, el Programa, a través del componente de desarrollo productivo, atenderá la demanda apoyando planes de uso racional de los recursos naturales, mejorando la coordinación territorial de las instituciones del Estado e incentivando una mayor complementariedad entre programas con fines similares.
- 1.24 El gobierno actual ha asumido el tema indígena como prioridad dentro de su política y ha establecido compromisos directos con la población indígena del país para dar solución a sus problemas, otorgando especial atención a las situaciones de discriminación existentes. En mayo del 2000, a partir de las propuestas del Grupo de Trabajo Indígena, estos compromisos se manifiestan en un “Plan de 16 medidas” el que ya está en ejecución. Entre dichas medidas está la creación de la “Comisión de Verdad y Nuevo Trato”¹ y la aprobación del primer préstamo solicitado para la ejecución de este Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas. A pesar de que el Estado chileno dispone de distintos instrumentos, programas y recursos para responder a la situación desventajosa de las poblaciones indígenas en el país, aún requiere contar con mecanismos de mayor articulación para generar un impacto duradero en dicha población, así como intervenir con mayor pertinencia cultural y participación de los beneficiarios.

D. Experiencia del Banco en la temática indígena

- 1.25 Con el mandato del Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704) el Banco asumió el compromiso específico de incrementar sus esfuerzos de promover el desarrollo de los grupos indígenas en el contexto de la reducción de la pobreza y de la equidad social, e incluir en forma sistemática este tema en las actividades regulares del Banco. El Banco cuenta con experiencias en este sector, existiendo desde 1994 una Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario en su Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS). Esta unidad es el punto focal de las políticas y operaciones en este campo. Desde 1979, el BID ha financiado

¹ La principal responsabilidad de esta Comisión es elaborar una política de Estado que aborde los problemas fundamentales de los pueblos indígenas y que reconozca la diversidad cultural existente en el país.

más de 200 proyectos que han beneficiado directa o indirectamente a comunidades indígenas. A partir de 1994 se ha visto un aumento muy significativo en el número de proyectos sociales dirigidos a indígenas o que incluyen medidas especiales para atender a esta población.

- 1.26 El Banco ha financiado programas de inversión social en Perú, Guatemala, Guyana, Bolivia, México entre otros, que incluyen acciones tendientes a incorporar la participación de los indígenas. En los últimos años, varios de los proyectos que está financiando el Banco en el área de desarrollo comunitario han estado dirigidos al fortalecimiento del capital social de comunidades indígenas. Entre ellos estarían los Programas de Desarrollos Comunitario para la Paz (DECOPAZ) de Guatemala, Grupos Vulnerables de Argentina, Costa Pacífica de Colombia, Costa Atlántica de Nicaragua y Desarrollo Sustentable del Darién en Panamá. En general, estos programas se caracterizan por tener un carácter integral, contar con mecanismos participativos y por ejecutarse de manera descentralizada, es decir, tienen características similares a esta operación.

E. Estrategia del Banco en el país

- 1.27 El Banco ha elaborado recientemente la estrategia de país, la cual ha sido concebida como un proyecto conjunto con el gobierno y a partir de la cual el Banco focalizará su acción. Entre las áreas prioritarias de dicha estrategia, en el ámbito social, se resalta la necesidad de contribuir a la reducción de desigualdades sociales y regionales, así como fortalecer una sociedad con mayor participación. En este contexto, la estrategia del Banco es apoyar a las poblaciones indígenas a través del diseño de un Programa que utilice metodologías participativas e involucre a las comunidades en las etapas de diseño y ejecución. Este Programa además articulará sus acciones con otros proyectos recientemente aprobados, Programa de Mejoramiento de la Eficiencia y de la Gestión Regional (CH-0161) y el Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado (CH-0165). Asimismo, es congruente con el interés del Banco en promover un crecimiento económico con equidad social y por lo tanto, en intervenir para reducir la exclusión social de los grupos étnicos.

F. Conceptualización del Programa

- 1.28 El diseño de este Programa se enmarca en la Política Indígena y se ha realizado dentro de un contexto donde los sucesivos Gobiernos de Chile en la última década han decidido avanzar en el reconocimiento de las culturas de las distintas etnias y en acciones que respondan a sus necesidades y demandas. A pesar de que la mayoría de los proyectos financiados por el Banco están en una etapa temprana de ejecución, se han extraído algunas lecciones positivas, que constituyen el eje del diseño del Programa: (i) alto compromiso del gobierno central; (ii) coordinación interinstitucional eficiente; (iii) gestión descentralizada de los recursos; (iv) participación activa de los organismos gubernamentales en la administración y coordinación del Programa, aunque se tercericen los servicios directos a la comunidad; (v) alto grado de participación y apropiación de los proyectos por parte de las comunidades indígenas; (vi) establecimiento de capacidad de diálogo y negociación intercultural; (vii) aplicación de metodologías culturalmente

pertinentes; y (viii) realización de estudios socioculturales de diagnóstico, basados en relaciones de parentesco y autoridad tradicional, con consideraciones de género y generacionales, que involucren a todas las organizaciones funcionales e informales.

- 1.29 En general, las experiencias de consulta realizadas por el gobierno, el mayor acercamiento entre el sector público y la población indígena, así como la política indígena existente, por lo general han sido consideradas positivas por los actores involucrados. No obstante, este Programa reconoce la importancia de seguir avanzando en el proceso de crear espacios de participación de las comunidades indígenas, así como de considerar medidas para que las políticas sectoriales acojan los factores culturales propios del tema indígena y recojan la especificidad de estos problemas. Como se ha dicho anteriormente, los programas públicos requieren tener una mayor coherencia con las prácticas y dinámicas tradicionales de los pueblos indígenas, es decir, tener pertinencia cultural, con el fin de que las acciones dirigidas a superar los problemas de las comunidades participantes sean efectivas y tengan un impacto en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
- 1.30 El Programa responderá a las demandas prioritarias provenientes de las mesas de trabajo que afectan a las comunidades indígenas del área rural. De manera congruente con el proceso de descentralización existente en el país, el Programa intervendrá con una activa participación de los beneficiarios de manera integrada, articulada, transparente y descentralizada. Se pondrá gran énfasis en fortalecer la capacidad de gestión y administrativa de las comunidades indígenas participantes, promoviendo prácticas que conduzcan a generar espacios de desarrollo autosustentables y que tengan identidad cultural. Asimismo, se prevé que los proyectos financiados por el Programa tendrán un mayor impacto y sostenibilidad en la medida en que éste ofrezca un espacio de participación a los beneficiarios tanto durante el diseño como durante la ejecución del mismo. Por otra parte, se apoyará el rediseño y/o flexibilización de los instrumentos con que cuenta el Estado, de modo que sean compatibles con la realidad de las poblaciones indígenas.
- 1.31 Se acordó que el Programa, debido a su carácter novedoso y su complejidad, requerirá más de un ciclo de proyecto, por lo cual tendrá una modalidad de multifase. Principalmente, los motivos que han llevado a tomar esta decisión son: (i) el impacto de las inversiones del sector público en las comunidades indígenas ha sido bajo y fragmentado y los proyectos de inversión no se han mantenido en el tiempo; (ii) el Programa incorpora metodologías participativas y mecanismos de ejecución novedosos en el país, que implican el involucramiento activo y articulación de diversos actores públicos, así como la coordinación interministerial, todo lo cual lleva a la necesidad de capacitar y ofrecer herramientas a los funcionarios públicos participantes para que modifiquen sus prácticas antes de realizar intervenciones extensivas; y (iii) se requiere responder a las demandas indígenas con algunas experiencias que tengan pertinencia cultural y que puedan ajustarse antes de expandirse.
- 1.32 Específicamente, se considera crítico contar con una base sólida para desarrollar criterios metodológicos claves y operar con metodologías participativas. Por lo

tanto, la ejecución se realizaría en dos fases, ejecutando las intervenciones sólo en 600 comunidades en una primer fase y comenzando en aquéllas donde se han iniciado procesos de diagnóstico como es el caso de las ADI. En esta primera fase se realizarán las actividades que fortalezcan a las comunidades y a los organismos públicos, desarrollando procesos participativos y ejecutando a la vez proyectos de alto impacto y valoración por parte de los beneficiarios. Una vez que se compruebe la eficacia de las metodologías e instrumentos utilizados, se considerará una segunda fase, durante la cual, se espera consolidar la institucionalización de las metodologías interculturales y participativas en el contexto del fortalecimiento de los organismos del sector público participantes.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos

- 2.1 El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural, particularmente en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental.
- 2.2 Los objetivos específicos del Programa son: (i) mejorar las capacidades y oportunidades de los beneficiarios en el ámbito productivo, educativo, y de salud; (ii) fortalecer a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) y a las comunidades indígenas beneficiarias del Programa en materia de desarrollo integral con identidad mediante una gestión participativa; y (iii) institucionalizar la temática indígena en los distintos sectores, creando capacidades en los organismos públicos para que la atención a las poblaciones indígenas sea articulada, adecuada y con pertinencia cultural.
- 2.3 Los objetivos específicos de la primera fase son: (i) fortalecer la capacidad de los organismos públicos para atender de manera articulada la problemática específica de las poblaciones indígenas con pertinencia cultural; (ii) fortalecer a las comunidades para que participen en la planificación y ejecución de las intervenciones del Programa y para que se “apropien” de los proyectos; (iii) poner a prueba metodologías participativas e intervenciones que no se hayan aplicado anteriormente para conocer su efectividad; (iv) ejecutar proyectos de educación, salud y desarrollo productivo con pertinencia cultural, que permitan definir con mayor precisión el diseño de las actividades antes de extenderlas en una segunda fase; y (v) obtener resultados de estudios de costo efectividad de las intervenciones, que permitan concentrarse en las actividades que ofrecen mayores beneficios para dar prioridad a los servicios estatales de mayor efectividad.
- 2.4 Al término de la primera fase del Programa se deberán alcanzar ciertas metas que constituyen acciones desencadenantes para extender las intervenciones a otras comunidades indígenas en una segunda fase del Programa. En general, se deberá demostrar que las metodologías participativas y acciones interculturales se han traducido en una mayor demanda de servicios y satisfacción por parte de las comunidades indígenas. También deberá analizarse la eficacia del mecanismo de articulación interinstitucional. Las acciones desencadenantes se presentan en el Cuadro II-1.
- 2.5 Las metas de la segunda fase se definirán con detalle al término de la primera, pero en términos generales se espera consolidar las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de las comunidades indígenas, dirigidas a ampliar la cobertura, eficiencia, calidad y regulación de los servicios participantes con un enfoque integral y una dimensión étnico cultural, de modo que se reduzcan las brechas de calidad de vida que existen en perjuicio de la población indígena. Se espera asimismo, que hayan quedado establecido mecanismos de diálogo permanentes y efectivos entre el Gobierno y las comunidades indígenas.

Cuadro II-1: Acciones desencadenantes para ejecutar la Segunda Fase del Programa

COMPONENTES	ACCIONES	JUSTIFICACIÓN
Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas y de las Instituciones Públicas	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 400 comunidades tienen un plan de desarrollo aprobado a nivel de la comunidad. Cinco ADI cuentan con organización indígena y con capacidad de diseño y gestión de su plan operativo anual de actividades e inversiones. Funcionarios de los organismos públicos involucrados ofrecen servicios con pertinencia cultural de acuerdo a la percepción de los usuarios. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) ha mejorado su capacidad técnica y organizacional. 	La activa participación de las comunidades y el fortalecimiento de sus organizaciones, así como la oferta articulada de servicios del sector público con pertinencia cultural, constituyen la base e integralidad de las inversiones de desarrollo del Programa.
Desarrollo Productivo	<ul style="list-style-type: none"> El ingreso neto promedio de las familias que se benefician en el primer año del Programa, excede en un 10% al de las familias rurales indígenas no participantes (Este porcentaje se calculó en base a las experiencias existentes en el país). 	Las propuestas de diversificación de las actividades económicas agrícolas y no agrícolas, concebidas por las propias comunidades indígenas como compatibles con su cultura, permitirán incrementar los ingresos de las familias.
Educación y Cultura	<ul style="list-style-type: none"> 180 proyectos financiados para la recuperación del patrimonio cultural indígena. Al menos el 70% de las 150 escuelas que participan en el PEIB tienen una mejoría estadísticamente significativa de las tasas de retención escolar (asistencia, abandono y repitencia) 	El desarrollo de proyectos culturales provenientes de las comunidades indígenas permitirán recuperar su patrimonio cultural. La participación del PEIB es clave para mejorar los resultados educativos, por su pertinencia cultural y lingüística.
Salud Intercultural	<ul style="list-style-type: none"> Modelos interculturales de atención diseñados, implementados y evaluados en cuatro centros pilotos (dos Mapuche, uno Aymara y uno Atacameño). La utilización de los servicios de salud aumenta en un 30%. 	El desarrollo de modelos interculturales de atención en salud generan una mayor valoración, favorecen la inclusión social de las comunidades indígenas y el acceso a los servicios públicos.

B. Focalización

- 2.6 De acuerdo al censo de 1992, el *universo* de familias indígenas rurales pertenecientes a las comunidades mapuches, aymaras y atacameños es de 47.179 familias, correspondiendo a la I región 5.057; a la II 3.517; a la VIII 7.292; a la IX 21.640; y a la X 9.673.
- 2.7 La focalización del Programa tendrá un carácter territorial y actuará en las siguientes 44 comunas: (i) comunas donde se ubican las tres ADI declaradas en la actualidad y las dos en proceso de declaración, dado que estas comunidades ya están agrupadas en espacios territoriales con alta homogeneidad ecológica necesaria para mantener el equilibrio natural de las cuencas, ríos, riberas, flora y fauna; (ii) comunas donde hay beneficiarios del FTI y del Ministerio de Bienes Nacionales, por la importancia de ofrecer simultáneamente recursos y asistencia técnica para la producción; y (iii) comunas donde habitan comunidades y familias indígenas que pertenezcan a territorios donde existe una alta concentración de población indígena y pobreza, de acuerdo a los indicadores de pobreza utilizados por MIDEPLAN.
- 2.8 Los beneficiarios del Programa serán familias de comunidades indígenas aymara, atacameña y mapuche localizadas en el área rural de la I, II, VIII, IX y X región. La población objetivo en las 44 comunas focalizadas asciende a aproximadamente 26 mil familias rurales, correspondiendo al 55% del universo y a aproximadamente

1.300 comunidades. El Programa deberá abarcar en su primera fase a una población objetivo de cerca de 12 mil familias indígenas, correspondientes a cerca de 600 comunidades. En la segunda fase, se espera alcanzar 14 mil familias adicionales en las 700 comunidades restantes.

C. Componentes

- 2.9 El Programa tiene un carácter integral, intersectorial y participativo. El diseño de los componentes responde en forma diferenciada y con diversos instrumentos a las distintas realidades sociales, incluyendo la situación específica de las mujeres y jóvenes indígenas, así como las económicas y agroecológicas que existen en los territorios indígenas.
- 2.10 Los componentes del Programa y subcomponentes son producto del trabajo conjunto de los distintos actores que estarán involucrados en la ejecución y/o que se beneficiarán de este Programa, el cual será coordinado y/o ejecutado por su Secretaría Ejecutiva (SE). La primera fase del Programa contempla ejecutar: (i) un componente de fortalecimiento de las comunidades indígenas y de las instituciones públicas, que ejecutará la SE y CONADI; (ii) un componente de desarrollo productivo, cuya ejecución será responsabilidad compartida del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y CONADI; (iii) un componente de educación y cultura, que ejecutará el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la CONADI; (iv) un componente de salud intercultural que ejecutará el Ministerio de Salud (MINSAL); y (v) un componente de mercadeo social que ejecutará la SE.

1. Componente de fortalecimiento de las comunidades indígenas y de las instituciones públicas (US\$6,3 millones)

- 2.11 El objetivo de este componente es generar capacidades y compromisos a nivel de las comunidades para la planificación y ejecución participativa de las intervenciones del Programa. A través de este componente se avanzará en el proceso de autogestión comunitaria en 600 comunidades, afectando a aproximadamente 12 mil familias, y se apoyará a cerca de 50 asociaciones indígenas constituidas legalmente en la formulación de proyectos. Asimismo, a través de este componente se realizarán actividades para mejorar las capacidades técnicas, así como para sensibilizar y aumentar el compromiso de las instituciones públicas participantes en el Programa (CONADI, Ministerios, gobiernos regionales, gobernaciones y municipalidades) de manera de integrar la perspectiva indígena e intercultural en las políticas y mejorar la eficiencia e impacto de los programas públicos. Este componente consta de los siguientes subcomponentes:
- a) Fortalecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas (US\$4,6 millones)**
- 2.12 Este subcomponente se propone generar mayor capacidad de acción y de autogestión en las comunidades y asociaciones indígenas, dando especial importancia al contexto territorial, ya sea el presentado por las ADI u otros territorios con alta concentración de población indígena. Se busca generar capacidades en las comunidades y familias, apoyar a las organizaciones existentes

y contribuir a la generación de nuevos liderazgos que potencien el capital social de los pueblos indígenas. El trabajo de fortalecimiento a las comunidades se realizará en las comunidades y en las ADI, variando la modalidad de trabajo según se trate de abordar a unas u otras. En el caso de las ADI se privilegiarán las comunidades agrupadas. La organización y participación de las comunidades se promoverá por medio de un proceso de planificación participativa, que a su vez aportará información sobre la población objetivo, sus necesidades y prioridades para ser utilizada en la planificación de las inversiones del Programa.

- 2.13 Se financiarán iniciativas y proyectos provenientes directamente desde las comunidades participantes, siempre que sean prioritarias y complementarias con las acciones de desarrollo que promueve el Programa. El esquema de financiamiento de estas propuestas tendrá un carácter ágil y de rápido desembolso de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Operativo (RO) del Programa y la transferencia de recursos se hará directamente a las cuentas bancarias de las Comunidades Indígenas beneficiadas. Se financiará por lo menos un proyecto por comunidad. El financiamiento de proyectos de desarrollo productivo no se hará con estos recursos.
- 2.14 Por otra parte, se prevé financiar cursos/talleres de capacitación y asistencia técnica a las comunidades. Se realizarán también actividades de capacitación a dirigentes de las comunidades en liderazgo, gestión y administración, oferta pública y resolución de conflictos así como cursos/talleres de capacitación y asistencia técnica a las asociaciones de productores indígenas. Asimismo, se implementarán planes de educación ambiental y se fortalecerá el sistema extrajudicial de resolución de conflictos contemplado en la ley indígena. Se ofrecerán pasantías para que haya intercambio de experiencias entre las comunidades.
- 2.15 En las ADI el Programa financiará: (i) acciones para promover la institucionalidad participativa de las ADI; (ii) capacitación para la planificación y diseño de sus proyectos; (iii) capacitación en gestión y administración, oferta pública y resolución de conflictos para los dirigentes de la organización que se generará en las ADI; y (iv) planes de manejo y conservación de recursos naturales.
- 2.16 Asimismo, el Programa apoyará cinco experiencias innovadoras de gestión participativa que se estén llevando a cabo en el ámbito territorial, para lo cual se seleccionarán las experiencias y se realizarán acciones de apoyo, previo análisis de factibilidad de los proyectos. A la vez, se analizarán estas experiencias mediante talleres participativos de trabajo que examinen experiencias similares en el ámbito internacional.

b) Fortalecimiento y capacitación de las entidades públicas participantes (US\$1,7 millón)

- 2.17 Este subcomponente se dirige a fortalecer las instituciones públicas participantes en el Programa. Se organiza en torno a dos objetivos: (i) fortalecer a la CONADI, dada su responsabilidad en relación a la política indígena; y (ii) aumentar la capacidad, sensibilidad y compromiso a nivel de las instituciones públicas participantes en el Programa (MIDEPLAN, Ministerios de Educación y Salud,

INDAP, CONAF, Intendencias, gobiernos regionales y municipalidades, así como otros organismos pertinentes) para integrar la perspectiva indígena e intercultural en sus políticas y programas.

- 2.18 Para lograr que los funcionarios públicos modifiquen sus prácticas y que los programas o intervenciones de desarrollo indígena tengan pertinencia cultural, se financiarán cursos y talleres intensivos, con un componente práctico y experimental (visitas, ejercicios, intercambios) en historia y cultura indígena, diálogo y negociación intercultural. Asimismo, se prevé financiar encuentros o talleres sobre la temática indígena con el propósito de incorporar el componente étnico en las políticas públicas, los cuales serían organizados por la CONADI.
- 2.19 Para mejorar la capacidad técnica y organizacional de la CONADI se financiará: (i) la formulación de una propuesta de fortalecimiento técnico y organizacional; (ii) consultoría para poner en marcha las recomendaciones que dicha propuesta sugiera, entre los cuales habrán temas de gestión administrativa, recursos humanos, proceso de delegación de funciones y evaluación y seguimiento de las actividades que realiza la CONADI; (iii) el diseño y la posterior implementación de una estrategia de comunicación, información y difusión de las actividades de CONADI y de la temática indígena en el país; (iv) cursos de negociación, manejo de conflictos para un mínimo de 40 funcionarios, así como el apoyo al sistema de resolución anticipada de conflictos de esta institución; y (v) diseño de un modelo de gestión de los proyectos, así como acciones para mejorar la capacidad de negociación y coordinación de la CONADI con otros organismos públicos. Se apoyará también la gestión técnica del Consejo de la CONADI, para lo cual se financiarán estudios y asesorías técnicas en las materias que legalmente le compete. Finalmente, se financiarán asesorías especializadas que den respuesta a los requerimientos de la “*Comisión de Verdad y Nuevo Trato*” y se fortalezca la institucionalidad del Estado en la temática indígena.

2. Componente de desarrollo productivo (US\$19,7 millones)

- 2.20 El objetivo general del Componente de Desarrollo Productivo es mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las personas y familias rurales aymaras, atacameñas y mapuches. Los objetivos específicos de este Componente, son: (i) incrementar los ingresos autónomos de las 600 comunidades indígenas rurales focalizadas mediante el fortalecimiento y diversificación de aquellas actividades económicas agrícolas y no agrícolas que ellos mismos consideren compatibles con sus culturas; (ii) asegurar una adecuada participación de las comunidades indígenas en el proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos; (iii) apoyar la elevación del nivel de inversión privada en las áreas rurales indígenas como mecanismo de desarrollo socioeconómico de largo plazo; y (iv) brindar el soporte institucional a las agencias estatales de fomento productivo que ejecutarán el componente. Estos objetivos específicos se alcanzarán respectivamente a través de la ejecución de los siguientes subcomponentes:

a) Fomento de actividades productivas rurales (US\$14,0 millones)

- 2.21 A través de este subcomponente se financiará proyectos de desarrollo productivo en zonas indígenas rurales contenidos en Planes Productivos que formarán parte de

los Planes Comunitarios de Desarrollo (PCD). Estos proyectos estarán orientados a (i) fomentar acciones destinadas a mejorar la rentabilidad de actividades agropecuarias y promover la diversificación de las fuentes de ingreso de las familias a través del desarrollo de actividades no agrícolas; y (ii) mejorar la gestión de los recursos naturales. Para estos dos tipos de proyectos, los recursos del Programa sólo financiarán los siguientes rubros:

- a. Proyectos de fomento agropecuario y de diversificación productiva: los gastos elegibles adicionales, por encima de los montos máximos de aporte público, para los proyectos que cumplen con las normas de los servicios estatales actualmente en ejecución con mayor pertinencia para poblaciones rurales pobres e indígenas. La descripción de estos servicios en términos de agencia ejecutora, gastos elegibles y bonificación máxima se encuentra en el RO.
- b. Proyecto de Gestión de Recursos naturales: Los gastos elegibles para la ampliación de cobertura de servicios estatales destinados a la forestación y al manejo de áreas forestales y no forestales. Estos gastos incluyen: (i) los gastos de asistencia técnica para proyectos de forestación, manejo de plantaciones y recuperación de suelos según las normas del Decreto Ley 701; (ii) gastos de asistencia técnica para el manejo de renovales, recuperación y enriquecimiento del bosque nativo degradado, manejo de renovales tipo forestal siempre verde y manejo de bofedales y otros recursos arbóreos altiplánicos según las normas del Programa de Bosque Nativo y Otros Recursos Vegetacionales, ambos ejecutados por la CONAF; (iii) adquisición de plantas y equipo, asistencia técnica o capacitación para la agroforestería, la forestación y la reforestación, en tierras sin saneamiento de propiedad según las normas del Programa de Bonificación Subsidiaria ejecutado por la CONAF; y (iv) inversiones y adquisiciones orientadas hacia la recuperación ambiental en áreas no forestales, según las normas del Programa de Recuperación Ambiental del INDAP.

- 2.22 La suma de la bonificación otorgada por el Programa, más aquéllas otorgadas por las instituciones de acuerdo a las normas regulares de cada servicio, será hasta 90% del costo total del Plan Productivo. El porcentaje restante corresponderá al aporte de la comunidad. Con el fin de asegurar una distribución equitativa del monto destinado a este subcomponente entre las familias beneficiarias, el monto máximo destinado por el Programa para el financiamiento del Plan Productivo durante la Fase I no será mayor a US\$1.200 por familia participante. La contribución ofrecida por el Estado en esta actividad, permitirá: (i) proveer servicios que, por su naturaleza pública y por las condiciones de pobreza de los beneficiarios, no serían ofrecidos en niveles adecuados (e.g. asistencia técnica y transferencia de tecnología); y (ii) generar externalidades ambientales positivas y un manejo adecuado de recursos naturales (mejor uso del suelo).

b) Apoyo a las comunidades (US\$4,1 millones)

- 2.23 Este subcomponente financiará servicios de asesoría y asistencia técnica tanto para la formulación de los Planes Productivos como para la ejecución de proyectos en todas aquellas comunidades indígenas participantes que, al momento de su postulación, no dispongan de este tipo de servicios, sean éstos financiados con fondos públicos o privados. Se estima que un 50% de las comunidades indígenas

carecen de este tipo de servicios. El propósito de este servicio es brindar igualdad de oportunidades a todas las comunidades participantes para la preparación y negociación de sus Planes Productivos.

- 2.24 Los proyectos productivos que serán financiados por el Programa en la primera fase permitirán aumentar los ingresos de las familias indígenas que participarán del Programa. Para lograr un mayor grado de avance hacia este objetivo de largo plazo, se requiere incentivar inversiones de mayor cuantía. En este sentido, este subcomponente financiará la contratación de servicios de consultoría especializada para la identificación y evaluación de proyectos de inversión productiva de alta rentabilidad en las cinco ADI del Programa. Asimismo, los servicios de consultoría incluirán seminarios de difusión y validación con inversionistas privados (nacionales y extranjeros). La metodología de trabajo deberá permitir la participación activa de la comunidad de cada ADI en la discusión y elaboración de los estudios de preinversión.

c) Apoyo a las agencias estatales de fomento productivo (US\$1,6 millones)

- 2.25 Este subcomponente financiará coordinadores técnicos zonales quienes realizarán la vinculación de las oficinas locales de las agencias públicas coejecutoras con las Unidad Ejecutora Zonales (UEZ), involucrando actividades descritas en el RO. Incluye además la contratación de ejecutivos de proyectos de proyectos y de especialistas administrativos para responder a la mayor carga de trabajo contable, de registros, e informes financieros; así como viáticos y apoyo logístico incrementales a la ejecución de estas contrataciones.
- 2.26 Asimismo, el subcomponente financiará un estudio destinado a brindar elementos que permita al Estado realizar los ajustes necesarios a la calidad y efectividad de su oferta actual de servicios de fomento productivo para la Fase II del Programa. El estudio evaluará críticamente y brindará recomendaciones técnicas sobre los siguientes aspectos: (i) las tasas actuales de financiamiento de gastos elegibles; (ii) los topes máximos para las bonificaciones; (iii) los criterios técnicos, ambientales y económicos utilizados para determinar elegibilidad de un proyecto para financiamiento; (iv) los costos actuales de intermediación; y (v) pertinencia de los instrumentos y propuestas de modificación a éstos.

3. Componente de educación y cultura (US\$11,7 millones)

- 2.27 Los objetivos de este componente son: (i) rescatar, fortalecer y desarrollar la cultura de las comunidades aymara, atacameño y mapuche promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad; y (ii) diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica para el mejoramiento en amplitud y calidad de los aprendizajes correspondientes al curriculum nacional de enseñanza general básica que propone la Reforma de la Educación, en 150 escuelas donde estudian niños y niñas de los pueblos indígenas aymara, atacameño y mapuche.

a) Promoción del desarrollo de la cultura y el arte (US\$3,0 millones)

- 2.28 Se financiarán las siguientes actividades: (i) proyectos concursables de cultura y arte que serán implementados por aproximadamente 600 comunidades indígenas; (ii) propuestas culturales comunitarias que se implementarán en localidades indígenas donde existan escuelas que participen del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB); y (iii) organización y desarrollo de una bienal de arte y cultura y eventos conmemorativos del Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

b) Implementación del programa de educación intercultural bilingüe (US\$8,8 millones)

- 2.29 Se trabajará en el marco de la reforma educativa que se desarrolla en el país sobre la base de una noción de programa territorial, bajo un enfoque sistémico. Específicamente, esta intervención pedagógica permitirá avanzar en la temática curricular referidas a la educación intercultural bilingüe, incorporando un proceso de formación integrado y de calidad, lo cual permitirá a los estudiantes progresar en sus aprendizajes y al mismo tiempo, fortalecer su cultura originaria y su contexto cultural.
- 2.30 Se prevé financiar las siguientes acciones: (i) *fortalecimiento institucional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) del MINEDUC y del Área de Cultura y Educación de la CONADI*, a través de la contratación de profesionales y técnicos especialistas en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para robustecer los equipos de nivel central y provincial, así como de la readecuación de los espacios físicos y de equipamiento informático; (ii) *socialización y difusión de la EIB* hacia la familia, las comunidades y los organismos del Estado, a través de actividades informativas sobre los fundamentos, objetivos y contenidos de la propuesta EIB y promover la participación en su implementación; (iii) *desarrollo y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientado a la EIB en forma participativa*, ofreciendo asistencia técnica a las 150 escuelas participantes en la elaboración participativa de su PEI orientado hacia la interculturalidad y bilingüismo; (iv) *desarrollo curricular*, realizando estudios, cursos de capacitación y asistencia técnica que permitan contextualizar y adecuar el currículum, complementar objetivos/contenidos y elaborar planes y programas EIB; (v) *desarrollo profesional docente*, para lo cual se ofrecerán cursos de capacitación, pasantías, seminarios y otros eventos; (vi) *recursos de aprendizaje*, diseño y elaboración de materiales educativos con pertinencia cultural, así como adquisición y distribución de recursos tales como bibliotecas de aula complementaria, equipamiento audiovisual básico e implementos deportivos y musicales; (vii) *investigaciones aplicadas, de acción y de base vinculada a lo pedagógico y al seguimiento de las actividades del PEIB*, para lo cual se realizarán estudios que permitan ofrecer propuestas de asistencia técnica pertinentes, generar conocimientos en la EIB a nivel docente y comunitario y entregar insumos para el desarrollo de otras líneas del subcomponente que permita obtener información sobre los procesos y resultados del PEIB; (viii) *sistema de evaluación de los aprendizajes*, que se aplicará al inicio del Programa en las 150 escuelas participantes, lo que permitirá contar con una línea de base sobre los aprendizajes de los alumnos del segundo y cuarto básico, y poder contrastar esta información

con los resultados de una evaluación al término de la ejecución de la segunda fase del Programa. Específicamente se aplicarán pruebas de competencias lingüísticas, matemáticas y socioculturales; (ix) *fomento al desarrollo de iniciativas locales*, que surjan de las escuelas orientadas a producir cambios en las prácticas pedagógicas y en los modelos participativos de gestión en la EIB; (x) *nuevas tecnologías de comunicación e información*, por medio de la implementación en las escuelas participantes de Televisión e Informática Educativa; y (xi) la educación de jóvenes y adultos en el marco de una educación intercultural.

4. Componente de salud intercultural (US\$6,7 millones)

- 2.31 El objetivo de este componente es elevar la situación de salud de la población indígena, mediante la eliminación de barreras culturales y la ampliación del acceso físico a los servicios públicos. Para cumplir con este objetivo se diseñarán, validarán e institucionalizarán modelos de salud interculturales de atención, gestión y financiamiento en la red pública de zonas con alta concentración de población indígena. Específicamente, los recursos del componente financiarán actividades de asistencia técnica, sensibilización y capacitación, encuentros y seminarios, promoción y mercadeo social, e inversiones en obras y equipos en los cuatro subcomponentes descritos a continuación, las cuales son complementarias a las que en el ámbito de la salud intercultural desarrolla el Estado chileno.

a) Modelos de atención de salud intercultural de referencia (US\$3,9 millones)

- 2.32 Este subcomponente pretende construir, validar e institucionalizar, con interlocutores representativos de los distintos pueblos participantes, del Estado y de la sociedad civil, modelos referenciales culturalmente apropiados de atención, gestión y financiamiento de salud de la población indígena rural. Dichos modelos se construirán a partir de experiencias de salud intercultural en Chile (e.g., Maquehue, Nueva Imperial, Alto Bío-Bío) y en otros países, de los lineamientos propuestos en política intercultural del Ministerio de Salud, y de los resultados de cinco experiencias “piloto” previstas en este subcomponente.
- 2.33 Se financiarán acciones de: (i) sistematización participativa de información sobre las experiencias nacionales (revisión documental, grupos focales, talleres, sistemas de gestión y financiamiento, costos, encuestas de satisfacción de usuarios y proveedores, determinación de la situación de partida o línea de base para el monitoreo y evaluación); (ii) visitas y análisis de experiencias pertinentes en tres países que serán seleccionados conforme a criterios definidos en el RO; (iii) diseño y ejecución con metodologías participativas de cinco experiencias piloto seleccionadas en función de su alcance, profundidad, abordaje y replicabilidad. Se financiarán actividades de coordinación, formación y capacitación de recursos humanos, equipamiento y adecuación de sistemas de gestión y financiamiento y de infraestructura, entre otros rubros; (iv) estudios complementarios para el diseño de los modelos de atención (arquitectónicos, epidemiológicos, de opinión de usuarios y agentes de medicina indígena, de modalidades de autocuidado, gestión y financiamiento); y (v) documentación y evaluación externa participativa.

b) Mejoramiento de calidad, sensibilidad y pertinencia cultural de los servicios de salud (US\$1,9 millón)

- 2.34 Este subcomponente busca sensibilizar, informar y capacitar a los funcionarios de los 10 servicios de salud que atienden población indígena rural en las comunas focalizadas por el Programa. Su objetivo es generar cambios en las prácticas de atención, gestión y trato a los usuarios considerando un enfoque intercultural. Los beneficiarios directos serán todo el personal directivo y de atención directa al público. Para ello, se financiarán acciones de capacitación, desarrollo de una estrategia comunicacional y diseño de un programa de inducción para nuevos profesionales de salud, así como una propuesta curricular de salud intercultural.
- 2.35 A corto plazo, se espera como producto del subcomponente, que haya mejorado el trato y la pertinencia cultural en la atención a la población indígena en toda la red de los servicios participantes en esta etapa. En el largo plazo, se espera contar con egresados de las carreras de la salud más sensibles y con mayor conocimiento sobre las culturas originarias.

c) Fortalecimiento de la medicina indígena (US\$282 mil)

- 2.36 Este subcomponente está orientado a generar propuestas para fortalecer y articular la medicina indígena en el marco de un modelo de atención de salud intercultural, a través del financiamiento y apoyo para el desarrollo de encuentros entre agentes de la medicina indígena (machis, yatiris, componedores, comadronas, parteras, etc.) de las zonas en que se focalizará el Programa. Promoverá y apoyará la formulación de propuestas que permitan avanzar en el ejercicio, la calidad, base tecnológica y financiamiento de la medicina indígena, en los esfuerzos para la conservación y disponibilidad de la flora medicinal y el bosque nativo (en coordinación con el componente productivo), en la solución de problemas que afecten sus actividades, así como en su relacionamiento con el sistema público de salud y el desarrollo de un modelo de salud intercultural. Se financiará: (i) la contratación de monitores indígenas que facilitarán el desarrollo de los encuentros y la elaboración de propuestas; y (ii) los insumos y gastos relacionados con la realización de los encuentros y actividades asociadas a la elaboración de propuestas.

d) Mejoramiento del acceso a la red de servicios interculturales de salud (US\$600 mil)

- 2.37 A través de este subcomponente, se pretende incidir directamente en los indicadores desfavorables de las comunidades indígenas y en la falta de acceso, sensibilidad cultural y capacidad resolutoria de la red de servicios públicos, fortaleciendo el vínculo entre la medicina pública y la indígena. Con este fin, se ampliará la aplicación de los modelos interculturales desarrollados en los tres primeros subcomponentes y se mejorarán las prestaciones para las comunidades. Los recursos de este subcomponente serán administrados directamente por la SE, aunque a diferencia de las iniciativas comunitarias correspondientes al subcomponente de fortalecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas, habrá una estrecha coordinación con los establecimientos de salud involucrados. Los proyectos que se financien permitirán ampliar el acceso de los beneficiarios del Programa a servicios interculturales con capacidad resolutoria, conforme a los

modelos productos del componente. Sólo se financiarán proyectos de obras menores y equipos presentados por las comunidades para adecuar los establecimientos de salud a los parámetros de calidad e interculturalidad manejados en el ciclo de capacitación de funcionarios (subcomponente 2).

5. Componente de mercadeo social (US\$1,1 millón)

- 2.38 Con el objetivo de difundir y promover el Programa se financiará el diseño y la implementación de una estrategia informativa y comunicacional, donde se definan las ideas matrices y los tipos de mensajes para cada uno de los públicos objetivos involucrados. La estrategia estará dirigida a distintos públicos objetivos que compartan algunos propósitos comunicacionales afines, los que deberán segmentarse de acuerdo a sus características particulares. Principalmente, el foco central de la estrategia se situará en el universo de usuarios actuales y potenciales del Programa, pero también en la opinión pública en general.

D. Costo y financiamiento

- 2.39 De manera preliminar, el costo total de las dos fases del Programa se ha estimado en aproximadamente US\$133,4 millones, de los cuales US\$80 millones provendrían del financiamiento del Banco Capital Ordinario (CO) y los US\$53,4 millones restantes corresponderían a la contrapartida del Gobierno chileno. El monto total de la primera fase es de un total de US\$58 millones, de los cuales US\$34,8 millones corresponderán al préstamo del Banco y US\$23,2 millones a la contrapartida nacional (ver Cuadro II-2). La preparación del Programa se financiará con recursos de la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP), cuyo monto es de US\$300 mil. El costo administrativo constituye el 9% del total debido a la necesidad de descentralizar las actividades y contar con promotores y técnicos que asesoren a las familias en las propias comunidades. El Banco financiará algo menos del 45% de dichos costos, particularmente el equipamiento y gastos de personal para ejecutar el Programa en los dos primeros años.
- 2.40 Complementariamente, el Gobierno solicitó al Banco que se reconozcan retroactivamente gastos elegibles del Programa, hasta US\$500 mil, efectuados a partir del 1 de enero del 2001.

CUADRO II-2: PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDIGENAS
ESTIMACION DE COSTOS
(en US\$ miles)

CATEGORIA DE GASTOS	TOTAL	FINANCIAMIENTO		%
		BID/CO	LOCAL	
1. Administración	5.273	2.342	2.931	9,0
2. Fortalecimiento: Comunidades Indígenas e Instituciones Públicas	6.258	0.720	5.538	11,0
2.1 Fortalecimiento y desarrollo de las Comunidades Indígenas	4.574	0.130	4.444	8,0
2.2 Fortalecimiento y capacitación de entidades públicas y CONADI	1.684	0.590	1.094	3,0
3. Desarrollo productivo	19.673	19.021	0.652	34,0
3.1 Fomento de actividades productivas rurales	14.000	14.000	-	24,0
3.2 Apoyo a las Comunidades	4.074	4.074	-	7,0
3.3 Apoyo a las agencias estatales de fomento productivo	1.599	0.947	0.652	3,0
4. Educación y Cultura	11.705	7.354	4.351	20,0
4.1 Promoción del Desarrollo de la Cultura y el Arte indígena	2.927	0.000	2.927	5,0
4.2 Programa de educación intercultural bilingüe	8.778	7.354	1.424	15,0
5. Salud Intercultural	6.657	2.355	4.302	11,0
5.1 Modelo de Atención de Salud Intercultural de Referencia	3.925	0.478	3.448	6,5
5.2 Mejoramiento de la Calidad, Sensibilidad y Pertinencia Cultural de los servicios de salud en territorio indígena	1.850	1.032	0.819	3,0
5.3 Fortalecimiento de la medicina indígena	0.282	0.246	0.036	0,5
5.4 Mejoramiento del acceso a la red de servicios interculturales	0.600	0.600	-	1,0
6. Mercadeo Social	1.100	1.100	-	2,0
7. Evaluación y Seguimiento	1.260	1.260	-	2,0
8. Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP)	0.300	0.300	0.000	1,0
9. Costos financieros	5.774	0.348	5.426	10,0
9.1 Intereses	5.005	-	5.005	8,7
9.2 Comisión de crédito	0.421	-	0.421	0,7
9.3 FIV (Inspección y Vigilancia)	0.348	0.348	-	0,6
TOTAL	58.000	34.800	23.200	100,0

III. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.1 El prestatario será la República de Chile y la ejecución del Programa será responsabilidad del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), a través de su Secretaría Ejecutiva (SE) y contará con la participación de otros organismos públicos.
- 3.2 Los principales coejecutores del Programa serán la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Ministerio de Educación (MINEDUC), el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), lo que permitirá institucionalizar la temática indígena. Con el propósito de ofrecer servicios de manera integrada, MIDEPLAN firmará Convenios con cada uno de los organismos coejecutores, los cuales deberán contener al menos: (i) compromisos de ejecución del componente o subcomponente en su totalidad en el lapso de duración del Programa, incluyendo cuando corresponda la definición de recursos por los ejecutores que se comprometerán durante la ejecución; (ii) designación de los responsables del cumplimiento de los compromisos; (iii) detalle de ejecución, y metas específicas por componente con plazos y recursos asociados; y (iv) procedimientos de rendición de cuenta de los recursos traspasados en el marco del Programa, para lo cual los organismos coejecutores serán responsables de establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad y de archivo que respalden los gastos e inversiones del Programa. A pesar de que el contenido de los Convenios ha sido acordado con las entidades coejecutoras, **como condición previa al primer desembolso para la ejecución individual de cada componente, se requerirá la firma del Convenio entre MIDEPLAN y el correspondiente organismo responsable de su coejecución.**

B. Esquema de ejecución

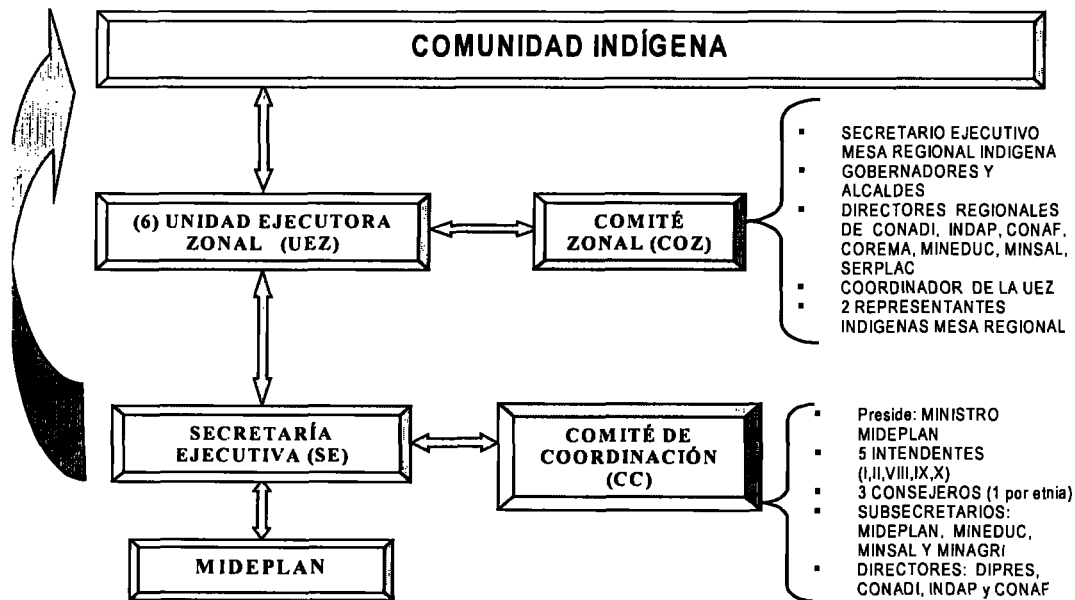
- 3.3 El esquema de ejecución del Programa tiene tres niveles: (i) Nacional, donde estará la SE y un Comité de Coordinación (CC); (ii) Zonal, donde se establecerán Unidades Ejecutoras Zonales (UEZ) apoyadas por un Comité Zonal (COZ); y (iii) Comunitario, desde donde provendrán las propuestas de intervención de las comunidades indígenas y donde se implementarán las acciones y proyectos del Programa. El esquema de ejecución tiene un carácter descentralizado, en cuanto a la provisión de los distintos productos, y promueve la activa participación de las familias y comunidades beneficiarias. Por otra parte, en toda la línea de ejecución del Programa participarán activamente profesionales y técnicos indígenas idóneos, ya que se dará preferencia a la contratación de técnicos/profesionales indígenas en igualdad de condiciones.

1. Comité de coordinación

- 3.4 El Ministro de MIDEPLAN presidirá el CC, creado por Decreto Supremo, el que estará integrado por tres consejeros indígenas designados por el Consejo de la CONADI que representen a las tres etnias participantes, por las autoridades

descritas en el Gráfico III-1 y por el Secretario Ejecutivo del Programa, en calidad de Secretario del Comité. El CC deberá: (i) velar por la integralidad y coordinación de las acciones del Programa; y (ii) recomendar ajustes en las líneas de acción generales del Programa y en los compromisos administrativos y financieros para su cumplimiento. Con el objeto de conocer y recomendar acciones sobre la planificación y ejecución anual del Programa, el CC se reunirá trimestralmente. Las autoridades de las entidades participantes nombrarán a un representante en un comité técnico de la SE. La constitución del CC y su operatoria será condición previa al primer desembolso.

GRAFICO III-1: ESQUEMA DE EJECUCION



2. Secretaría ejecutiva

- 3.5 A través de la SE, MIDEPLAN se responsabilizará como coordinador de la ejecución del Programa ante el Banco respecto a todos los aspectos contables y financieros y de control interno relacionados con el Programa, tales como: (i) preparación de las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos; (ii) mantenimiento de los registros contables y financieros detallados del Programa; (iii) preparación y prestación de los informes financieros semestrales relacionados con el fondo rotatorio; (iv) preparación y presentación de los estados financieros auditados del Programa; y (vi) otros informes que sean requeridos.
- 3.6 La SE estará constituida por un Secretario Ejecutivo, quien contará con un equipo constituido por: (i) un especialista correspondiente a cada uno de los componentes de fortalecimiento institucional, desarrollo productivo, educación y salud, preferentemente profesionales indígenas y/o con alta experiencia en la temática; (ii) un especialista administrativo-financiero; (iii) un especialista en medio ambiente; (iv) un asesor jurídico; y (v) un profesional de apoyo técnico a la SE. La SE se ubicará en la ciudad de Santiago. **La presentación de la evidencia que se haya constituido la SE y se haya dotado del personal técnico calificado para**

asumir las responsabilidades previstas, será condición previa al primer desembolso. Previamente, deberá presentarse al Banco para su aprobación, los procedimientos de selección, términos de referencia, borrador de contratos, presupuesto ajustado para la contratación del personal (a igualdad de calificaciones técnicas se dará preferencia a la contratación de profesionales/técnicos indígenas).

- 3.7 Las principales funciones del Secretario Ejecutivo serán: (i) administrar, coordinar supervisar y orientar la ejecución de las actividades del Programa; (ii) crear el mecanismo que asegure el eficiente manejo de los recursos; (iii) ejecutar el Componente de “Fortalecimiento de las comunidades indígenas y de las instituciones públicas”; (iv) disponer los desembolsos de recursos a los organismos coejecutores del Programa según términos establecidos en los respectivos convenios, así como requerir las rendiciones que procedan; (v) cumplir las funciones de Secretario Técnico del CC; (vi) seleccionar a las comunidades indígenas que serán atendidas durante la Fase I del Programa, de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo (RO); (vii) velar por la integralidad, coherencia y pertinencia étnica de las intervenciones; (viii) aprobar el traspaso de los recursos a las comunidades indígenas; (ix) aprobar y suscribir contrataciones, acuerdos y contratos; y (x) ejecutar el componente de Mercadeo Social; (xi) coordinar el diseño e implementación del sistema de información del Programa; (xii) ser responsable del seguimiento y la evaluación del Programa; (xiii) ejecutar los estudios de apoyo a la promoción de inversiones en zonas indígenas; y (xiv) ejecutar el estudio de análisis crítico de la oferta de servicios de fomento productivo del Estado.
- 3.8 El objetivo del sistema de información del Programa será: (i) facilitar el seguimiento de la ejecución de las actividades y cumplimiento de metas en cada uno de los componentes; (ii) permitir la actualización y seguimiento de la ejecución del presupuesto del Programa; (iii) posibilitar el rápido acceso de los actores involucrados en el Programa, de la ciudadanía en general y de las instituciones fiscalizadoras de la República, a la información relativa a la ejecución del Programa. Se financiará el Sistema de Reporte Contable de la SE y de los coejecutores, el que formará parte del sistema de información del Programa. El sistema de información del Programa se diseñará dentro de los seis primeros meses de ejecución, a contar del primer desembolso, de modo que se implante en el segundo semestre de ejecución. Contará con terminales en cada una de las UEZ y en los servicios responsables de la ejecución de los componentes, y además con una página Web en Internet asociada a las páginas de MIDEPLAN y CONADI.

3. Unidades ejecutoras zonales CONADI-BID

- 3.9 La SE actuará desconcentradamente en UEZ, en las I, II, VIII, IX y X región. El Programa tendrá seis UEZ, una por región, con excepción de la IX que tendrá dos. Las UEZ serán dependientes de la SE y se localizarán en lo posible en las dependencias de la CONADI. La UEZ se coordinará preferentemente con funcionarios de las agencias coejecutoras en sus respectivas regiones y con los gobiernos locales. La UEZ constituirá la puerta de entrada y ventanilla única para que las Comunidades Indígenas accedan al Programa.

- 3.10 Las UEZ tendrán las siguientes responsabilidades: (i) realizar acciones de información, promoción y difusión de los alcances del Programa a las comunidades indígenas; (ii) seleccionar a los promotores, los que deberán ser validados por las comunidades indígenas; (iii) realizar el proceso de evaluación preliminar de factibilidad de proyectos productivos conjuntamente con los representantes de CONADI, CONAF e INDAP; (iv) realizar la evaluación técnica de los PCD, incluyendo sus proyectos productivos y convocar al COZ para su revisión; (v) someter a consideración de CONADI los proyectos culturales; (vi) coordinarse con el MINSAL para la evaluación de los proyectos de salud; (vii) suscribir oportunamente los convenios de ejecución con las comunidades en relación a los PCD; (viii) suscribir oportunamente los convenios por parte de las comunidades indígenas con los ejecutores de los proyectos; y (ix) realizar el seguimiento técnico a la implementación del PCD y en particular, de los proyectos en las comunidades, apoyando la identificación y solución temprana a los cuellos de botella.
- 3.11 Cada UEZ estará conformada por un Coordinador quien contará con el apoyo de un equipo técnico compuesto por técnicos en desarrollo rural y especialistas administrativo-financiero y, aproximadamente dos promotores que atenderán cerca de 20 comunidades, dependiendo de su concentración geográfica y/o demográfica que constituirán el enlace entre las comunidades y el Programa. Las comunidades revisarán el plan de trabajo anual de los promotores, el cronograma de sus actividades y supervisarán y evaluarán su trabajo. Los promotores deberán considerar la perspectiva de género en sus actividades con el objeto de fomentar la participación de la mujer. Los promotores sociales deberán tener experiencia en desarrollo comunitario y serán responsables de: (i) asesorar y apoyar a las comunidades en su proceso de organización y en la gestión de todo el ciclo de proyecto; (ii) identificar necesidades de capacitación y orientar a las comunidades indígenas; (iii) garantizar la amplia participación de los miembros de la comunidad y particularmente, de las mujeres y jóvenes; (iv) apoyar la implementación de los planes de educación ambiental (v) mantener informada a la comunidad sobre las características y normas del PCD; (vi) apoyar la elaboración de los PCD y la calidad de las propuestas; (vii) facilitar la implementación de los PCD y de las iniciativas comunitarias; (viii) orientar a la comunidad para acceder a otros recursos y fondos que promuevan su desarrollo; (ix) facilitar el vínculo y comunicación de la comunidad con el Programa y con otros organismos municipales, provinciales y regionales; (x) promover el establecimiento de mecanismos alternativos al crédito en las comunidades, como por ejemplo, fondos solidarios, que sirvan de garantía para el acceso al crédito; y (xi) apoyar a la UEZ en su tarea de coordinación intersectorial, detectando e informando tempranamente la situación y problemas que se presenten en las comunidades.

4. Comité zonal

- 3.12 Cada UEZ contará con un COZ, que estará conformado por los representantes mencionados en el Gráfico III-1. Cuando sea pertinente, participarán además en este comité la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). La UEZ será responsable de convocar al COZ para cada sesión, al menos trimestralmente. El COZ será responsable de las siguientes tareas: (i) coordinar las acciones del Programa a nivel regional,

municipal y comunitario; y (ii) aprobar de acuerdo al procedimiento que cada COZ adopte en base a una propuesta sugerida por el coordinador de la UEZ los planes y proyectos elegibles presentados por la UEZ.

5. Comunidades indígenas

- 3.13 En las áreas de intervención habrá una participación directa de las comunidades indígenas en el relevamiento de sus problemas, priorización de las intervenciones, planificación, gestión, elaboración de sus planes, así como en la ejecución y seguimiento de las actividades. Como el espíritu del Programa es delegar la ejecución de los proyectos a las comunidades beneficiarias, las comunidades indígenas participantes tendrán en el marco de su PCD, un presupuesto del cual girarán recursos después de constatar y demostrar a la UEZ el avance del PCD. Cada comunidad contratará los servicios y obras que se realicen en el marco de las iniciativas comunitarias.
- 3.14 Las asociaciones indígenas que participen en el Programa deberán tener personalidad jurídica. Las UEZ apoyarán su constitución legal, de modo que esta condición no se traduzca en un obstáculo para su participación. El Secretario Ejecutivo del Programa firmará los convenios de ejecución (CE) de las iniciativas comprendidas dentro de los PCD respectivos.

C. Reglamento operativo

- 3.15 La ejecución del Programa se regirá por el RO, el cual contiene tanto las normas y procedimientos para la ejecución de cada componente y subcomponente del Programa, así como las obligaciones y funciones del ejecutor y de todos los organismos participantes. Asimismo, el RO establece los criterios de elegibilidad de las acciones que sean financiadas por el Programa. **La puesta en vigencia del RO mediante Resolución del Subsecretario de MIDEPLAN será condición previa al primer desembolso.**

D. Ejecución del Programa

- 3.16 La ejecución del Programa se iniciará con tres estudios. El primero determinará la ubicación geográfica y condición jurídica de las comunidades mapuches, atacameñas y aymaras para seleccionar las 600 comunidades que conformarán el Programa. El segundo estudio elaborará y/o completará los diagnósticos demográfico, sociocultural, económico de tenencia de la tierra y de utilización del territorio, como insumo para el trabajo de promoción y planificación comunitaria. Dicho estudio tendrá contenido de género para identificar la situación y problemática específica de las mujeres y las brechas existentes. Simultáneamente, el tercer estudio determinará la metodología de promoción, planificación participativa y fortalecimiento de las comunidades participantes.

1. Fortalecimiento de las comunidades indígenas y de las instituciones públicas

- 3.17 Este componente será ejecutado por la SE conjuntamente con las UEZ. El fortalecimiento de la CONADI, con apoyo de la SE, estará a cargo de dicha

institución. Las actividades de asistencia técnica y de capacitación, tanto para el fortalecimiento de las comunidades como para el de los organismos del Estado, podrán ser tercerizadas a profesionales, técnicos, OSC, dando preferencia a las que integren a profesionales y/o técnicos indígenas.

- 3.18 Hay cuatro etapas diferenciadas, cuyo detalle será definido en el estudio que se contratará para tal efecto: (i) trabajo preparatorio de campo; (ii) planificación participativa y definición de un Plan Comunitario de Desarrollo (PCD) y de planes operativos anuales; (iii) ejecución del plan operativo anual; y (iv) acompañamiento y egreso. Las intervenciones en cada comunidad no superarán los 33 meses y el costo promedio será de US\$4.200. El monto variará según las características específicas de cada comunidad, tales como el número de familias y calidad de vida, características socio espaciales del territorio y otros.
- 3.19 Los PCD que presenten las comunidades se entienden como la culminación de un proceso de planificación participativa que se expresa en un plan de desarrollo y de acción consensuado por todos los miembros de la comunidad y que es coherente y adecuado a las necesidades y anhelos de esas familias, así como a las oportunidades y restricciones que ofrece el Programa y las políticas de gobierno.
- 3.20 Durante el proceso de planificación participativa se realizarán ejercicios y actividades tendientes a que las comunidades establezcan objetivos, definan prioridades, se informen sobre las normas técnicas de carácter sectorial, tomen decisiones sobre la asignación prioritaria de recursos e identifiquen fuentes de financiamiento disponibles, dentro y fuera del Programa. La comunidad deberá distinguir los proyectos que benefician a todos sus miembros de los que favorezcan a grupos de familias en determinadas áreas de desarrollo productivo. A la vez, deberá evaluar la conveniencia de mancomunar esfuerzos con comunidades vecinas para el desarrollo de proyectos intercomunitarios. Los PCD deberán cumplir con, por lo menos, los siguientes requisitos: (i) coherencia intraterritorial y con las políticas regionales/nacionales; (ii) consideración del entorno ligado a la comunidad y del tramado institucional del municipio, provincia y región; (iii) viabilidad y pertinencia de las iniciativas propuestas; (iv) haber sido elaborados con amplia participación de la comunidad; (v) responder a las necesidades prioritarias de la comunidad; (vi) ser coherentes con las políticas, normas y estrategias de desarrollo local; (vii) ser viables técnica y financieramente; (viii) promover el desarrollo económico y/o sociocultural de la comunidad; (ix) contener un plan de seguimiento; (x) contener un plan de mantenimiento de las obras y/o de sostenibilidad de las intervenciones; y (xi) ser consistentes con el Procedimiento Ambiental del RO.
- 3.21 Las comunidades deberán abrir cuentas bancarias con el fin de que la SE, a través de las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC) correspondientes u otros organismos públicos o privados, depositen los recursos aprobados para ejecutar las iniciativas comunitarias presentadas, incluyendo las correspondientes a salud, según mecanismos y criterios establecidos en el RO. El monto se asignará de acuerdo a lo establecido en el RO.

- 3.22 Se ejecutarán actividades de fortalecimiento de la CONADI, así como otras para incorporar la perspectiva indígena e intercultural en las instituciones públicas participantes. El apoyo a la “Comisión de Verdad y Nuevo Trato”, será responsabilidad de la SE y las actividades se realizarán dentro de los dos primeros años de ejecución del Programa. Para apoyar la gestión técnica del Consejo de la CONADI la SE contratará asesorías técnicas y estudios especializados que apoyen su proceso de toma de decisiones.

2. Desarrollo productivo

- 3.23 Los proyectos específicos de inversión o de prestación de servicios que se financiarán bajo el subcomponente *Fomento de actividades productivas rurales* estarán contenidos en Planes Productivos (PP). Con recursos del Programa sólo podrán financiarse proyectos, cuyo período de ejecución se inserte dentro del plazo de ejecución del Programa. La ejecución de los proyectos estará a cargo de INDAP, CONAF o CONADI, dependiendo si se trata de proyectos agrícolas, forestales o productivos no agrícolas.
- 3.24 El ciclo de proyectos se inicia con el proceso de formulación, evaluación y aprobación de los *PP*. El siguiente es el esquema secuencial de acciones en este proceso: (i) *La elaboración de PP* será una responsabilidad de las comunidades participantes. A través del subcomponente *Apoyo a las comunidades* podrán contratarse hasta 20 consultorías especializadas para atender hasta 20 comunidades que no cuenten con asistencia técnica para la elaboración de sus Planes; (ii) cada PP será sometido a un *proceso de calificación* ejecutada por la UEZ correspondiente según los siguientes criterios de elegibilidad establecidos en el RO; (iii) los PP que sean declarados elegibles serán *evaluados técnica, ambiental y económicamente* por las UEZ, con el apoyo de INDAP, CONAF y CONADI. Cada UEZ podrá contar con el apoyo de un organismo académico contratado competitivamente por la SE para realizar la evaluación de los Planes cuando la complejidad o volumen de los Planes sobrepase la capacidad de la UEZ o exista controversia. Cada UEZ será responsable de la supervisión de su contrato. El proceso de selección de los organismos candidatos deberá considerar las propuestas metodológicas para la evaluación técnica como económica de los Planes. Estas propuestas determinarán los criterios y procedimientos de aprobación de los Planes, los que se ajustarán a los parámetros de viabilidad técnica y factibilidad económica establecidos para los servicios estatales que forman parte del Componente y que están definidos en el RO. Entre los criterios de elegibilidad del PP está la promoción de la participación de la mujer en la actividad productiva; y (iv) una vez culminado el proceso de *negociación*, el proceso de ejecución de los proyectos contenidos en cada PP será acordado entre la UEZ y/o con INDAP, CONAF, CONADI y la comunidad a través de un CE.
- 3.25 Las comunidades participantes serán plenamente responsables de la gestión de los Planes Productivos. Estas, conjuntamente con INDAP, contratarán servicios de consultoría a través del subcomponente de *Apoyo a las comunidades*. Estas consultorías brindarán asistencia técnica y apoyo a la gestión de sus respectivos Planes Productivos. Los servicios de consultorías especializadas atenderán hasta

6.000 familias que no cuenten en la actualidad con este tipo de asistencia técnica. El INDAP administrará la contratación de estos servicios por parte del Programa.

- 3.26 Los estudios de apoyo a la promoción de inversiones en zonas indígenas contemplados dentro del subcomponente *Apoyo a las Comunidades* serán realizados por una o dos firmas especializadas con experiencia en materia de evaluación de grandes proyectos de inversión privada, al menos en las áreas de turismo, silvicultura, ganadería y agricultura. Los estudios deberán diseñar un Plan de Desarrollo para cada ADI. La supervisión del contrato estará a cargo de la SE.
- 3.27 Los coordinadores técnicos zonales, ejecutivos de proyectos y especialistas administrativos que apoyarán las labores de INDAP, CONAF y CONADI serán contratados de forma individual a través del subcomponente de *Apoyo a Agencias Estatales de Fomento Productivo*. Los contratos de estos consultores serán administrados respectivamente por las agencias beneficiadas.
- 3.28 Asimismo, a través del subcomponente de *Apoyo a las agencias estatales de fomento productivo*, una firma especializada llevará a cabo en el segundo año de ejecución del Programa el estudio de análisis crítico de la oferta actual de servicios de fomento productivo del Estado. La firma contará al menos con un economista con experiencia no menor de 10 años en la evaluación de proyectos productivos en el área rural.

3. Educación y cultura

- 3.29 A nivel nacional, el subcomponente de *Promoción del Desarrollo de la Cultura y el Arte Indígenas* será responsabilidad de la CONADI, a través de su área de Cultura y Educación, en coordinación con el MINEDUC (División de Cultura). Para estos efectos se constituirá un comité técnico conjunto cuyas funciones e integrantes se especifican en el RO. Se contratará a 15 promotores culturales para el apoyo y asistencia técnica a las comunidades en la generación y rescate de su patrimonio cultural. A nivel territorial o provincial, la CONADI será apoyada por las UEZ y, en las actividades que requieran tercerización, contará con el apoyo de OSC locales, profesionales y/o técnicos indígenas. A nivel local, serán las propias comunidades y familias en interacción con las escuelas del sector, las responsables de ejecutar las actividades orientadas al desarrollo de su cultura y arte.
- 3.30 El subcomponente de *implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB)* será ejecutado por el MINEDUC con apoyo del Área de Educación y Cultura de la CONADI. Para ello, tanto el Programa del Ministerio como el Área de Cultura y Educación de la CONADI, a nivel nacional como provincial, serán fortalecidos institucionalmente con la contratación de profesionales y técnicos especialistas en Educación Intercultural Bilingüe (EIB), dotación de equipamiento informático y adecuación de sus instalaciones. Para coordinar el trabajo de ambas instituciones se constituirá un comité técnico cuyas funciones e integrantes se especifican en el RO. Para dar inicio a las actividades de *nuevas tecnologías de comunicación e información, así como a la educación de jóvenes y adultos en el marco de una educación intercultural*, se deberá presentar para la aprobación del Banco, una propuesta que describa detalladamente las

distintas fases de desarrollo e implementación y los mecanismos de evaluación que serán considerados para medir el resultado de sus acciones.

- 3.31 A nivel territorial o provincial, las Direcciones Provinciales de Educación (DEPROV) serán las responsables de implementar las acciones del subcomponente en las escuelas con el apoyo de las unidades territoriales de CONADI (especialistas en educación y cultura). Para ello contarán con un equipo técnico pedagógico especializado en EIB, compuesto por supervisores y técnicos especialistas en EIB. Estos serán los responsables de apoyar y asesorar técnicamente a las 150 escuelas del Programa. A nivel local y, recogiendo la experiencia de los microcentros rurales, las escuelas participantes en el PEIB se podrán organizar territorialmente dependiendo de su grado de aislamiento, tamaño y voluntad. Con ello se potenciará una mayor socialización de los desafíos que implica el Programa, un intercambio profesional entre los docentes y la posibilidad de generar redes de apoyo. Cada una de las escuelas firmará un contrato de gestión, donde se establecerán los deberes y derechos para con el Programa, facilitando con ello el control social de la comunidad respecto a los resultados del mismo.
- 3.32 Paralelamente, en estos tres niveles se contará con el apoyo de OSC, universidades u otros organismos relacionados con el mundo de la educación y la cultura indígena, los que apoyarán algunas de las actividades del Programa, mediante acciones de tercerización. Con esto se promoverá el desarrollo de redes de apoyo técnico complementarias a la del MINEDUC.

4. Salud intercultural

- 3.33 Este componente será ejecutado bajo la responsabilidad del MINSAL, por la Subsecretaría de Salud, a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) de la División de Atención Primaria, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI de Salud), los Servicios de Salud y las entidades Administradoras de Salud Municipal pertinentes, de acuerdo a lo señalado en los distintos subcomponentes y en el RO. La SE del Programa, a través del encargado del componente de salud, será la contraparte técnica. El PESPI a nivel central será asesorado por un Comité Técnico integrado por el encargado del componente de salud de la SE, representantes de la CONADI, del Fondo Nacional de Salud (FONASA), del MINSAL y un representante indígena por cada etnia. El equipo PESPI central, al ser transformado en una Unidad de Salud de Pueblos Indígenas (USPI), será reforzado con personal adicional.
- 3.34 Como se establece en el RO, intervendrán en el desarrollo de los distintos subcomponentes, el equipo de coordinación nacional, PESPI, coordinadores PESPI a nivel de las SEREMI de Salud de las regiones participantes y de los Servicios de Salud involucrados, CONADI, Municipios, equipos de salud, agentes de medicina indígena y los promotores formados en el componente de fortalecimiento institucional. Las responsabilidades de las regiones vinculadas al Programa serán incorporadas a los compromisos de gestión que el Ministerio de Salud efectúa anualmente con las mismas.

5. Mercadeo social

- 3.35 El componente de mercadeo social, será responsabilidad de la SE y deberá estar diseñado dentro de los seis primeros meses a contar del primer desembolso. El público objetivo del Programa serán: (i) los usuarios/beneficiarios actuales y potenciales del Programa; (ii) los funcionarios públicos de las entidades coejecutoras; (iii) los funcionarios y el aparato público en general; (iv) las autoridades y personalidades de las regiones donde se realizará el Programa; y (v) la opinión pública en general.

E. Adquisición de bienes y servicios

1. Procedimientos de licitaciones

- 3.36 En conformidad con la política del Banco, en el caso de adquisición de bienes y servicios o en el caso de ejecución de obras, se adoptarán los procedimientos vigentes y que formarán parte integral del contrato de préstamo. Para las contrataciones de servicios de consultoría se seguirán los procedimientos indicados en el Documento GN-1679-3. La licitación pública internacional será obligatoria para las adquisiciones cuyo valor sea superior a US\$5 millones en el caso de contratos para la ejecución de obras²; a US\$350 mil en el caso de contratos para la adquisición de bienes; y a US\$200 mil en el caso de contratos de consultorías. La ejecución de obras o adquisición de bienes y servicios por montos inferiores se regirán por la legislación nacional.
- 3.37 Se hizo un análisis de MIDEPLAN y de los otros organismos públicos participantes para realizar adquisiciones, los cuales demostraron suficiente capacidad de ejecución. Por esta razón se recomienda que el Banco aplique la revisión ex-post por muestreo en el caso de la contrataciones por parte de entes públicos de obras inferiores a US\$500 mil, de contrataciones para la adquisición de bienes inferiores a US\$175 mil, de contratación de firmas consultoras por montos inferiores a US\$100 mil anuales y en el caso de contratación de consultores individuales por menos de US\$35 mil anuales.
- 3.38 Complementariamente, las contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios que tengan lugar por montos inferiores a los indicados en párrafo 3.36 y que determinan la exigencia de licitación internacional, se aplicarán los siguientes límites:
- a. Para las licitaciones de servicios de consultoría por montos inferiores a US\$200 mil se procederá como sigue: (i) contratación directa hasta US\$300; (ii) comparación de precios (la cual requerirá la adjudicación a la mejor de por lo menos tres cotizaciones) hasta US\$35 mil; (iii) licitación privada nacional aplicando la normativa aplicable al sector público hasta por US\$100 mil; y (iv) licitación pública nacional aplicando la normativa aplicable al sector público hasta US\$200 mil.

² No se prevé contratar obras por este monto, por lo tanto es improbable que haya licitación internacional.

- b. Para las licitaciones de bienes por montos inferiores a US\$350 mil se procederá como sigue: (i) contratación directa hasta por US\$300; (ii) comparación de precios (la cual requerirá la adjudicación a la mejor de por lo menos tres invitaciones) hasta US\$35 mil; y (iii) licitación privada nacional aplicando la normativa aplicable al sector público hasta US\$100 mil; y (iv) licitación pública nacional aplicando la normativa aplicable al sector público hasta US\$350 mil.
- c. Para las licitaciones de obras por montos inferiores a US\$5 millones se procederá como sigue: (i) comparación de precios (la cual requerirá la adjudicación a la mejor de por lo menos tres invitaciones) hasta US\$40 mil; (ii) licitación privada nacional aplicando la normativa del sector público hasta US\$200 mil; y (iii) licitación pública nacional aplicando la normativa del sector público hasta US\$5 millones. Se permitirá la utilización de administración directa para las comunidades por montos inferiores a US\$40 mil como se detalla en el próximo párrafo. Las principales adquisiciones previstas se detallan en el Anexo III-1.

2. Obras por administración

- 3.39 En el caso de adquisición de obras menores que las comunidades tengan la capacidad de ejecutar por su cuenta (a un precio igual o menor de los precios de referencia establecidos ad-hoc por la SE) se permitirá la ejecución por administración directa por parte de las comunidades, hasta por un 30% del límite total asignado a cada comunidad para inversiones. La SE emitirá un normativo con precios unitarios indicativos para este tipo de obras, que se aplicarán tanto a las obras por administración, como a las que ejecuten las entidades privadas.

3. Gastos a nivel local y evaluación de ofertas

- 3.40 Para facilitar el proceso de selección y contratación de las obras, bienes y servicios de consultoría a ser adquiridos por las comunidades, la SE y las UEZ tras publicar los correspondientes anuncios llamando a potenciales interesados, elaborarán listas de personas, empresas, y entidades activos en el medio local de ejecución del Programa para: la capacitación, el análisis de proyectos productivos, el suministro de materiales y de otros bienes, la construcción de obra física, y cualquier otro ámbito en el que se estime oportuno. Como se indica en el RO se tiene previsto un mecanismo para que la SE disponga de información para actualizar la lista de precios.

4. Propiedad de los bienes adquiridos

- 3.41 Salvo autorización expresa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del Programa deberán dedicarse para los fines del mismo, concluida la ejecución y de acuerdo a las recomendaciones de la SE podrán ser destinados a otros fines. Los bienes adquiridos con recursos del Programa que sean utilizados por las instituciones públicas participantes, incluyendo municipalidades, pasarán a conformar el patrimonio institucional de éstas, sin perjuicio de la normativa sobre propiedad intelectual. Por lo que respecta a los bienes adquiridos por las

comunidades con recursos del Programa, pertenecerán a las comunidades que los reciben.

- 3.42 Se transferirá la gestión de infraestructura construida por las comunidades a entidades públicas, cuando corresponda, para permitir su incorporación a la red de la entidad correspondiente, al objeto de que éstas asuman su operación y mantenimiento.
- 3.43 Para efectuar inversiones fijas por parte de las comunidades es condición inexcusable la demostración a la UEZ de que ésta posee la adecuada titularidad del terreno que se pretende construir³.

5. Sistema de información sobre las adquisiciones

- 3.44 Con respecto al Sistema de Información sobre las Adquisiciones (PRISM), no se presentará información sobre las adquisiciones efectuadas por las comunidades por debajo de los montos límites de licitación internacional. Esto se justifica por el gran número previsto de adquisiciones de pequeña envergadura y por la excesiva carga de trabajo que la misma implicará para la Representación, puesto que la información se recogerá de todas formas en los informes periódicos y en las solicitudes de desembolso.

F. Período de desembolso

- 3.45 Se estima que el plazo para el compromiso de recursos de la primera fase será de tres años y medio y el plazo de desembolso será de cuatro años. MIDEPLAN, como cada uno de los coejecutores, establecerán cuentas bancarias específicas y separadas para el manejo de los recursos de financiamiento y de la contrapartida local. Con cargo al financiamiento y después de haberse cumplido todas las condiciones previas al primer desembolso, el Banco podrá adelantar recursos para establecer un fondo rotatorio hasta un máximo que no exceda el 5%. Estos recursos se depositarán y manejarán por el ejecutor en una cuenta bancaria especial a nombre del Programa. El RO establece los acuerdos en materia de la administración financiero contable del Programa. El ejecutor deberá presentar, dentro de los 60 días posteriores al final de cada semestre calendario informes consolidados del estado de situación de los recursos del fondo rotatorio en su poder y en cada una de las UEZ. De acuerdo al plan de ejecución, a continuación se presenta en el Cuadro III-1 el programa tentativo de inversiones y desembolsos tanto de recursos del préstamo como de la contrapartida local para la primera fase.

³

Se está considerando que la titularidad esté respaldada por: (i) título de propiedad o usufructo; (ii) certificación donde consta el derecho real de herencia declarado judicial; o (iii) cualquier otra que la SE considere satisfactoria de acuerdo con informes técnicos de la CONADI.

Cuadro III-1: Calendario de desembolsos (en US\$ millones)						
Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total	%
BID	6,9	16,3	10,5	1,1	34,8	60,0
Local	2,6	9,0	9,4	2,2	23,2	40,0
Total	9,5	25,3	19,9	3,3	58,0	100,0
%	16,0	44,0	34,0	6,0	100,0	100,0

- 3.46 Debido a la complejidad institucional, amplitud geográfica y variedad de componentes del Programa, se estima que la metodología factible de revisión de los desembolsos del préstamo del Banco deberá ser ex-post. No obstante ello, como quiera que el Programa no dispone aún de una base inter e intrainstitucional que permita prever con una razonable certidumbre que se podrá implementar satisfactoriamente tal alternativa, los primeros desembolsos del Préstamo serán revisados ex-ante. La Representación, a partir de la evaluación que se efectúe de la calidad de la administración financiera de la SE y con base en los resultados ciertos que se obtengan de la revisión de las rendiciones de gastos que presente el ejecutor, habilitará oportunamente el inicio, alcance y frecuencia de dicha revisión ex-post.
- 3.47 Con el propósito de coadyuvar a superar tal limitante, la Representación está coordinando con la contraparte el inicio en fecha temprana, posiblemente durante el mes de marzo de 2001, un ciclo de seminarios en materia de administración financiera de operaciones, incluyendo a los coejecutores.
- 3.48 Asimismo, y como parte de los mecanismos de control internos del Programa, se ha previsto que los Departamentos de Auditoría interna de las distintas instituciones participantes, o equivalentes, en coordinación con los Auditores Externos (Contraloría General), elaborarán un programa anual de auditoría de los recursos que el Programa traspase a sus respectivos servicios. Dichos programas anuales, así como los resultados que de los mismos se deriven, serán informados oportunamente a la SE y al Banco. Para tal efecto la SE los incluirá en los informes semestrales de progreso junto con los estados consolidados del Programa (de inversiones por categoría y fuente de financiamiento y de efectivo recibido y desembolsos efectuados).

G. Seguimiento y evaluación del Programa

- 3.49 El seguimiento de la operación se basará principalmente en los indicadores desarrollados en el marco lógico general del Programa (ver Anexo III-2) y en los marcos lógicos específicos de los componentes anexos al RO. Sin embargo, por el carácter multifase y multisectorial del Programa, habrá un especial cuidado en identificar problemas que pongan en riesgo el éxito de su primera fase y se harán los ajustes técnicos necesarios. Se prevé que dentro de un período de dos meses después de que el préstamo se declare elegible para desembolsos, el Banco apoyará a MIDEPLAN para realizar un taller de puesta en marcha del Programa.
- 3.50 Para el seguimiento de la operación, la SE deberá presentar al Banco *informes semestrales*, dentro de los 60 días siguientes a la fecha del cierre de cada semestre calendario, que contengan un análisis del avance de la ejecución y el estado de cumplimiento de las metas anuales establecidas para el caso de cada componente.

- 3.51 Complementariamente, y con el propósito de evaluar la adecuada planificación y ejecución financiera por parte de la SE, a lo largo del primer año de ejecución se supervisará estrictamente la gestión presupuestaria y financiera que efectúe la SE, estableciéndose que los desembolsos se realizarán en base a proyecciones de gastos a efectuarse en los próximos cuatro meses. Dichas proyecciones se basarán en los presupuestos y proyecciones elaborados por las UEZ y la propia SE para cada semestre de ejecución. Durante la ejecución del Programa, el prestatario a través del MIDEPLAN, presentará 120 días después de finalizado cada ejercicio fiscal, los estados financieros del Programa auditados por la Contraloría General de la República.
- 3.52 Con el propósito de apoyar el proceso de ejecución y en particular, los cambios y ajustes necesarios para avanzar en dicho proceso, durante la primera fase del Programa se realizarán *reuniones anuales* (aproximadamente dos meses después de la entrega del segundo informe semestral) del Banco, con MIDEPLAN y los organismos participantes para revisar el informe de avance, el estado de cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los componentes y subcomponentes y dificultades encontradas para su cumplimiento. Se prevé que se harán visitas a terreno para verificar que los mecanismos de ejecución estén funcionando adecuadamente, que se esté dando el nivel de participación esperado, que los instrumentos utilizados en el seguimiento de las intervenciones son eficientes y que el proceso de presentación de los planes de desarrollo por parte de las comunidades es ágil y participativo.
- 3.53 El seguimiento del Programa en las Comunidades Indígenas será exhaustivo, es decir, se realizará en todas las comunidades participantes. Se enfocará en primer lugar, en verificar el cumplimiento y la satisfacción de las acciones por parte de los beneficiarios. El seguimiento deberá identificar las causas de los problemas, errores y/o insatisfacciones que hayan surgido de la ejecución y ofrecer alternativas de acción.
- 3.54 En las Comunidades Indígenas se establecerán *Comités Participativos de Apoyo a la Gestión* (COPAG), instancias participativas y de control ciudadano, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Programa, reportar a la UEZ la marcha global de éste y hacer recomendaciones para perfeccionarlo. Anualmente se realizarán encuentros por región de los COPAG con las comunidades indígenas y con las instancias directivas del Programa, para revisar su funcionamiento. El COPAG estará compuesto por representantes de la comunidad donde se estén ejecutando los proyectos. Los promotores y las COPAG serán los principales agentes que entregarán insumos en el proceso de seguimiento en las comunidades. Ambos deberán realizar un registro sistemático, utilizando instrumentos estandarizados, con el fin de que las UEZ y los otros actores institucionales puedan contar con información objetiva que permita tomar acciones correctivas en forma oportuna.
- 3.55 Para el seguimiento global del Programa se contratará a una entidad especializada que utilice metodologías del tipo “estudios de caso” a partir de las anomalías detectadas, de manera de examinar con profundidad cada fenómeno para emitir juicios sobre sus causas. Para la elaboración de alternativas de solución se

considerará la implementación de metodologías participativas. La duración del contrato de la entidad responsable será de tres años y medio, lo cual permite estabilizar la relación y contar con una entidad comprometida con el Programa. Este contrato estipulará cláusulas que establezcan las causales de término de la relación, así como los procedimientos para modificar los términos de referencia y renegociar los montos comprometidos. Se producirán informes que contengan productos: (i) predefinidos, relacionados con momentos claves de la ejecución de cada componente; y (ii) asociados a eventos inesperados y relevantes para el buen funcionamiento de la operación.

- 3.56 Con el fin de evaluar el progreso y resultados del Programa al inicio de la ejecución se diseñará un sistema de evaluación y de monitoreo del Programa, y se construirá la *línea de base*, la que deberá contener entre otros indicadores, información inicial sobre las ADI, la capacidad institucional de los organismos participantes, los requisitos contenidos en el Procedimiento Ambiental del RO y la sensibilidad y conocimiento sobre la problemática indígena de los funcionarios públicos involucrados y caracterización socioeconómica y cultural de las comunidades participantes. El diseño de dicho sistema tomará como base los indicadores que se presentan en el marco lógico. Tanto el diseño como la ejecución de las evaluaciones del Programa serán realizados por consultores independientes o instituciones académicas, quienes acordarán con la SE los indicadores y diseño. El diseño del sistema de evaluación y monitoreo, así como la línea de base, serán presentados al Banco durante los seis primeros meses contados a partir del primer desembolso, con la información cargada, procesada y disponible.
- 3.57 Para la evaluación de resultados del componente productivo, se aplicarán encuestas a una muestra estadísticamente representativa de la población indígena participante, desde el primer año de ejecución. El producto de este estudio comparará la evolución socioeconómica de las familias beneficiarias y no beneficiarias a partir de las variables cuantificadas en la línea de base. En el caso de los componentes de Educación y Salud, se utilizarán los registros oficiales de MINEDUC y MINSAL respectivamente y otros instrumentos de recopilación de información, adicionalmente a la información de la línea de base.
- 3.58 La determinación de la situación inicial en el caso de prácticas de los funcionarios públicos y de CONADI formará parte de las actividades que deberán realizar los consultores encargados de implementar las actividades de fortalecimiento institucional. Un estudio complementario será el de medición de la satisfacción de los usuarios respecto a las instituciones vinculadas al Programa, o sea, INDAP, CONADI, MINSAL, CONAF, MINEDUC y Municipalidades. Esta evaluación utilizará metodologías participativas.
- 3.59 Cuando se haya desembolsado por lo menos el 50% de los recursos del Programa y/o se hallan comprometido por lo menos 70% de los recursos, se realizará la evaluación que permita constatar el cumplimiento las acciones desencadenantes para extender las intervenciones en una segunda fase. Dicha evaluación tendrá contenido de género. Incluirá también aspectos relacionados con: (i) la evaluación de la estructura de control y financiera y contable adoptado en la primera fase del programa; (ii) aporte oportuno de los recursos de contrapartida local; (iii) manejo

del fondo rotatorio y presentación de justificaciones de gastos; (iv) cumplimiento de cláusulas contractuales; (v) informes de los auditores externos; y (vi) el nivel de coordinación y articulación interinstitucional logrado (eficacia del CC, COZ, etc.). Se prevé que dicha evaluación tendrá lugar después del inicio del tercer año de ejecución. La contribución del Programa en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades será medida al término de la segunda fase, para lo cual se realizará una evaluación de impacto.

H. Operación y mantenimiento

- 3.60 La operación y mantenimiento de los equipos y obras financiados por el Programa serán responsabilidad de las entidades públicas de los sectores participantes en la ejecución de los componentes del Programa. Con todo, en el convenio que deberán firmar las comunidades con la SE, se exigirá a dichas comunidades la manutención y operación de los equipos y obras adquiridos a través del Programa. A partir del segundo año de ejecución, los informes semestrales de la SE darán cuenta del estado de mantenimiento de los equipos y obras financiados, basándose en una muestra representativa de las inversiones financiadas en el año anterior.

IV. JUSTIFICACIÓN Y RIESGOS

A. Beneficios

- 4.1 El Programa se clasifica automáticamente como “proyecto focalizado en la pobreza” (PTI) por estar dirigido a mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo de pequeños productores agrícolas y artesanales del sector rural. Además, muchas intervenciones que financiará el Programa serán similares a las financiadas por los fondos sociales y, como se indica en el párrafo 1.3, las poblaciones indígenas de las zonas rurales donde actuará el Programa presentan indicadores de pobreza bastante más críticos que la población rural no indígena. En general, los indígenas duplican la población indígena en el país (personas que pertenecen a una familia cuyo ingreso mensual per cápita es inferior a US\$36 en el área urbana y US\$28 en zonas rurales). Por último, esta operación es coherente con los objetivos del aumento de la equidad social y reducción de la pobreza estipulados respectivamente en los párrafos 2.13 y 2.15 del documento AB-1704 de la Octava Reposición de recursos. El Gobierno no utilizará el 10% de financiamiento adicional.
- 4.2 El Programa fomentará la equidad social y promoverá el desarrollo económico y social, así como el fortalecimiento de las comunidades indígenas. Los beneficios del Programa no sólo serán materiales, sino también permitirán fortalecer y desarrollar la cultura de las comunidades indígenas participantes, así como promover el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad chilena. Un beneficio importante será el establecimiento de un modelo de intervención que permita responder eficazmente a las demandas de las familias indígenas y por otro lado, aumentar la eficiencia de los recursos públicos. El proceso participativo en el diseño y ejecución constituye un importante beneficio, ya que aumenta la confianza entre las partes y con ello, las posibilidades de éxito e impacto de éste y de otros programas o futuras intervenciones. Finalmente, se espera que las actividades de capacitación y sensibilización provoquen una reducción en las situaciones de racismo y discriminación existentes en el país.
- 4.3 El Programa actuará en territorios con alta densidad de población indígena procurando generar procesos de desarrollo integral con una perspectiva “étnico-territorial”. El territorio constituye una unidad que comparte rasgos socioculturales y potencialidades productivas, sin coincidir necesariamente con una unidad administrativa. Se concibe como un espacio donde se concentra el capital social y cultural con el fin de responder a las necesidades de los beneficiarios y fortalecer su identidad cultural y su pertenencia territorial. De esta manera se contribuye además a la implementación de la Ley Indígena como a sus medidas específicas para promover el reconocimiento de los derechos indígenas.
- 4.4 Específicamente en el sector salud, se prevé que el Programa contribuirá a reducir a mediano y a largo plazo la tasa de mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, así como a más corto plazo, permitirá mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud del sector rural. En el sector de educación se prevé

ofrecer una educación más pertinente y disminuir las tasas de repitencia y deserción y, con ello, lograr mejorar la calidad de vida y la inserción laboral. En el sector productivo se promoverá el fortalecimiento de redes comerciales y productivas de la población indígena, potenciando la producción silvoagropecuaria y la no-agrícola de modo sustentable. El apoyo técnico que ofrecerá el Programa tanto para mejorar las actividades económicas agrícolas como las no agrícolas, permitirá aumentar los ingresos familiares, fortalecer la capacidad de las microempresas, mejorar la calidad y comercialización de sus productos y recuperar la materia prima de las artesanías. Las actividades de fortalecimiento institucional y de capacitación tanto a las comunidades y organizaciones indígenas como a las instituciones del sector público y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), permitirán generar e institucionalizar una nueva modalidad de desarrollo participativo que permitirá superar las limitaciones de los modelos verticales que han caracterizado las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas de Chile.

- 4.5 Al estar este Programa focalizado en la población indígena se está promoviendo directamente la equidad social, beneficiando con ello a las comunidades, familias, mujeres y jóvenes indígenas, proporcionándoles servicios más pertinentes a su cultura y reduciendo con ello la discriminación que los afecta. En todos sus componentes, el Programa busca optimizar las oportunidades de desarrollo con pertinencia sociocultural, apoyando a las comunidades a articular su propio patrimonio cultural con un desarrollo económico que les permita superar los altos índices de pobreza material que los afecta. En el diseño de los componentes, particularmente en aquellos que conllevan infraestructura o actividades productivas, el proyecto tendrá especial atención en procurar un balance apropiado entre desarrollo económico y fortalecimiento cultural.

B. Impacto y análisis ambiental

- 4.6 El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) aprobó el Perfil II de esta operación el día 29 de septiembre de 2000. El CESI solicitó la elaboración de una Evaluación Ambiental Limitada (LEA). Se considera que el impacto ambiental del Programa será positivo en la medida en que se realicen las siguientes acciones: (i) recuperación de suelos y ecosistemas productivos degradados; (ii) mejoramiento del ordenamiento territorial y de la gestión de predios y de las Areas de Desarrollo Indígena (ADI); (iii) ejecución de proyectos que restablezcan el balance natural local, promuevan el turismo ecológico y parques protegidos; (iv) disminución de la contaminación ambiental y eliminación de activos ambientales; y (v) capacitación de las comunidades, asociaciones, empresarios y entidades públicas en la inclusión de la variable ambiental y del desarrollo sostenible en los proyectos que se financien.
- 4.7 Los impactos negativos sobre el medio ambiente podrían ocasionarse por: (i) proyectos productivos que no tomen precauciones de mitigación de impactos; (ii) proyectos de desarrollo sin gestión ambiental, que aumenten el abuso y deterioro de los recursos naturales y reduzca por lo tanto, la sostenibilidad

productiva; (iii) proyectos de infraestructura que aumenten la contaminación a través del incremento del número de vehículos, contaminación sanitaria, uso inadecuado de herbicidas, pesticidas y fertilizantes; (iv) falta de mantenimiento o abandono de los proyectos productivos; y (v) impactos negativos de la construcción y operación de unidades escolares y de salud.

- 4.8 De acuerdo con las tipologías evaluadas, se estima que la mayoría de los proyectos de desarrollo productivo, así como los de salud y de educación, presentarán impactos de fácil mitigación y que ya están previstos en las normas ambientales y sectoriales vigentes. Sin embargo, para asegurar la protección del medio ambiente y potenciar los impactos positivos, se preparó el Procedimiento Ambiental anexo al RO del Programa, el cual recoge los insumos de la evaluación ambiental. Dicho Procedimiento determina: (i) las responsabilidades institucionales y de fortalecimiento en el área ambiental que incluye la contratación de un especialista ambiental por parte de la SE; (ii) el financiamiento de planes de educación ambiental en cada una de las 600 comunidades participantes; (iii) los criterios de protección ambiental de los proyectos; y (iv) los planes de manejo y conservación de recursos naturales de las ADI; y (v) las metas e indicadores ambientales para el Programa.

C. Impacto socioeconómico del Programa

- 4.9 Dado el carácter multifase de esta operación no se determinará ex ante el impacto real de los proyectos sobre el bienestar de la población objetivo, sino durante la primera fase se realizarán dos estudios que permitan realizar una evaluación apropiada de la efectividad de los servicios de fomento productivo. El primer estudio permitirá establecer la línea de base socioeconómica de las familias participantes y el segundo, comparará la evolución socioeconómica de las familias con y sin Programa, a partir de las variables cuantificadas en el estudio de línea de base. En ambos casos, un análisis estadístico permitirá identificar los factores determinantes del nivel y composición del ingreso. En la segunda fase del Programa se podrá contar con los estudios de costo efectividad de sus intervenciones para concentrarse en las actividades que ofrecen mayores beneficios y priorizan los servicios estatales de mayor efectividad. En cualquier caso, como parte del RO, se requerirá que los proyectos productivos que se financien sean viables tanto técnica como económicamente.
- 4.10 Se prevé que las intervenciones del Programa dirigidas a promover la inclusión social de las comunidades indígenas tendrán beneficios más relevantes a largo plazo, una vez que los programas y políticas públicas sean más pertinentes a su realidad. Como diversos estudios lo han demostrado, las políticas y programas públicos que se focalizan hacia poblaciones indígenas, tienen una alta tasa de retorno socioeconómico, permitiendo romper el círculo de la pobreza en la medida en que se contribuye a mejorar la salud, educación y producción de las familias beneficiarias.

- 4.11 En el caso del componente de *desarrollo productivo*, se estima que los proyectos financiados por los servicios estatales de fomento productivo que forman parte del Programa en esta primera fase contribuyan a mejorar la situación socioeconómica de las familias rurales. En términos de la eficiencia del diseño del componente de desarrollo productivo, un 91,7% del costo total (US\$20 millones) beneficiará directamente a las comunidades indígenas. El restante 8,3% se destinará a apoyar labores de seguimiento, ejecución y evaluación que son responsabilidad del Estado. Este último porcentaje se encuentra por debajo de los actuales costos administrativos de los servicios estatales de fomento productivo (los gastos administrativos de INDAP representan el 18% de su presupuesto y en el caso de la CONADI, el 10%). Considerando que un total de 12 mil familias indígenas rurales serán beneficiadas por las actividades del componente, el monto total efectivo por familia será en promedio de US\$400. Este monto representa un incremento de 62% respecto al monto por familia asignado por el Estado para fomento productivo dirigido a los sectores de pequeños productores y campesinos en el 2000, a los cuales los grupos indígenas ya tienen acceso.
- 4.12 En términos de las intervenciones de *educación*, se ha comprobado que los beneficios sociales asociados a la aplicación de programas de formación intercultural bilingüe, permite alcanzar resultados educativos equivalentes al promedio nacional, permitiendo aprendizajes sólidos y el desarrollo de competencias reales y una alta rentabilidad socioeconómica en términos de ingresos futuros comparativos.
- 4.13 En materia de *salud*, la pertinencia intercultural permite que la población indígena se aproxime a equiparar los indicadores básicos para el sector (morbilidad, mortalidad y esperanza de vida al nacer, entre otros). En el caso de las políticas y programas del área de Desarrollo Productivo ocurre algo similar, los que evidencian marcados problemas en su ejecución e impacto debido a su falta de pertinencia y adecuación a la realidad organizativa y productiva de las comunidades indígenas.
- 4.14 Por último, cabe señalar que tanto la metodología participativa que se utilizó en el diseño, como la que se contempla utilizar durante la ejecución del Programa, asegurarán que los recursos lleguen en un alto porcentaje a los beneficiarios y que el porcentaje que se gaste en administración sea lo más bajo posible.

D. Consideraciones de género

- 4.15 Con el propósito de asegurar la participación de la mujer y equidad de género, en las actividades de fortalecimiento y desarrollo comunitario, se promoverá una activa participación de las mujeres en la identificación y priorización de sus necesidades, asegurando que el proceso de planificación recoja dichas necesidades y sean incorporadas en los planes de desarrollo de su comunidad. Se ofrecerá capacitación a las mujeres en áreas de liderazgo, negociación y otras, que les permita incorporarse o mejorar su participación en la fuerza laboral. En la actualidad, existen microempresas de mujeres indígenas, particularmente de

artesanía, que se beneficiarán de las actividades de fortalecimiento y asistencia técnica para mejorar la calidad y comercialización de sus productos. Las entidades participantes en la ejecución del Componente de Desarrollo Productivo, CONADI, CONAF e INDAP, considerarán medidas para que las dificultades que frecuentemente encuentran las mujeres de tiempo e ingreso, no constituyan barreras de entrada para participar en los programas productivos.

- 4.16 Por otra parte, se prevé que en las actividades previstas en los componentes de salud y educación las mujeres tendrán una activa participación. De hecho, una gran mayoría de los responsables de salud en las comunidades mapuches (machis) son mujeres y particularmente, entre los profesores primarios en el área rural hay un alto número de mujeres. El Programa ofrecerá oportunidades para que las mujeres jóvenes se empleen en áreas que no sean necesariamente el servicio doméstico, reduciendo la tendencia actual de las jóvenes indígenas a emigrar en búsqueda de empleo a las ciudades.

E. Viabilidad institucional y financiera

- 4.17 La viabilidad institucional de la ejecución del Programa se sustenta esencialmente en el compromiso asumido por el Gobierno de Chile de responder a las demandas de los pueblos indígenas y de impulsar políticas públicas que lleven a reducir las condiciones de desigualdad social existentes. En efecto, el actual gobierno ha asumido el tema indígena como prioridad dentro de su política y ha establecido compromisos directos con la población indígena del país para dar solución a sus problemas, otorgando especial atención a las situaciones de discriminación que las afectan.
- 4.18 Asimismo, existe un manifiesto interés y nivel de compromiso en la ejecución del Programa por parte de cada uno de los organismos participantes, los que estarán plasmados en los Convenios que serán firmados con MIDEPLAN. Avala esta afirmación, el hecho de que durante la etapa de diseño del Programa, un importante número de profesionales de las instituciones involucradas han participado en las distintas labores (talleres de involucrados y reuniones técnicas durante las misiones del Banco), logrando un alto nivel de consenso. Adicionalmente, la institucionalidad del Programa, en sus instancias nacionales y locales, considera la participación coordinada de los organismos públicos, de manera tal que su acción esté institucionalmente validada y sea coherente y oportuna frente a los beneficiarios.
- 4.19 Por otra parte, Chile tiene en marcha dos procesos que fortalecen la ejecución del Programa. En primer lugar, se ha dado un nuevo impulso a la descentralización y desconcentración, proceso que ya venía avanzado positivamente en los últimos ocho años. En segundo lugar, existe un interés y voluntad del gobierno por ampliar la participación ciudadana en las decisiones, manejo y control de los procesos de inversión pública. La viabilidad financiera del Programa se fundamenta en el estricto manejo fiscal del país y especialmente, en el alto interés manifestado por el Ministerio de Hacienda por aumentar el impacto de las

inversiones del sector público a través de intervenciones integradas. De hecho, los recursos para el aporte de contrapartida de este Programa están previstos en el presupuesto del año 2001 recientemente aprobado por el Congreso Nacional. Un indicador del interés del gobierno por financiar esta operación es el hecho que la matriz de financiamiento acordada es de 60/40, pudiendo ser 70/30 por tratarse de un programa focalizado en la pobreza (PTI). Por lo demás, en los casos de otros programas en ejecución con financiamiento del Banco en Chile, los recursos de contrapartida han sido oportunos.

- 4.20 MIDEPLAN cuenta con una estructura administrativa, dependiente de su Subsecretaría, que administra un presupuesto anual cercano a US\$10 millones, para lo cual cuenta con procedimientos de control y auditoría interna, adicionalmente a las funciones que cumple la Contraloría General de la República.
- 4.21 Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que la SE esté dotada de personal altamente capacitado en el manejo y uso de fondos provenientes del financiamiento, así como con experiencia y conocimiento en normas y procedimientos de adquisiciones del Banco. De esta manera, los equipos de la Secretaría Ejecutiva (SE) junto con la estructura administrativa de MIDEPLAN, contarán con procedimientos y capacidad técnica necesaria para enfrentar la complejidad institucional del Programa y el manejo del volumen de recursos estimado.

F. Riesgos

- 4.22 El éxito de este Programa está sujeto a la voluntad del gobierno chileno de construir una mejor relación y comunicación con las poblaciones indígenas, reconociendo la especificidad de su cultura y de sus problemas y además, de otorgarle una continuidad en el tiempo. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos sectores no respeten los principios de este Programa, es decir, participación, articulación intersectorial, transparencia e información. A nivel individual, los funcionarios públicos podrían manifestar actitudes de discriminación hacia las culturas indígenas, situación que afectaría el nivel de participación y de confianza de los beneficiarios. Entre las medidas de mitigación de este riesgo se contemplan actividades de sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos y sobre todo, se está promoviendo desde la etapa de diseño un alto nivel de involucramiento y de compromiso.
- 4.23 Un segundo riesgo está asociado a la intersectorialidad del Programa, lo cual implica que la ejecución sea compleja, con una alta participación de diversas entidades públicas, que tienen prácticas institucionales distintas. Este riesgo será mitigado tanto por el compromiso de las entidades participantes, el que se reflejará en Convenios que firmará cada una de ellas con MIDEPLAN, así como en el trabajo de coordinación intersectorial al interior de los comités del Programa.

- 4.24 Por otro lado, especialmente entre la población mapuche, cuya organización social es fragmentada, existe el riesgo de que no se logre una articulación efectiva entre los niveles descentralizados del Estado y la organización social tradicional indígena, lo que dificultaría la ejecución del Programa. Para minimizar este riesgo, el Programa ofrecerá actividades de capacitación y de fortalecimiento de las organizaciones indígenas y, enfatizará la creación de una institucionalidad efectiva a nivel de las ADI.

PROYECTO CH-0164 2001-2004 PRINCIPALES ADQUISICIONES

Concepto	Cantidad	Modalidad de Adquisición	Monto en Miles de US\$ Total	Fuente Financiamiento		Fecha Es de public de aviso de convocat
				Aporte Local	BID	
I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
CONSULTORIAS 1/						
Características y ubicación territorial de las comunidades	1 estudio	LPRN	100.000		100%	2001 I
Desarrollo de metodología de trabajo participativo y capacitación a promotores	1 taller	CP	30.000		100%	2001 I
Asesoría y apoyo para instalar institucionalidad en las ADIs	5 global	LPI	450.000	100%		2002 I
Manejo y conservación de recursos en las ADIs	5 planes	LPRN	100.000	100%		2002 I
Taller de capacitación de manejo del medio ambiente	1 global	LPN	120.000	100%		2002 I
Capacitación a 120 dirigentes de organizaciones indígenas	1 global	LPRN	66.000	100%		2001 II
Trabajo de campo y discusión para examinar experiencias locales	3 talleres	LPRN	60.000	100%		2001 II
Capacitación de prácticas de funcionarios públicos	8 grupos de 60 personas 2 cursos cada grupo	LPI	544.000	100%		2001 II
Implementación de actividades recomendadas en la propuesta administrativa, recursos humanos, delegación de funciones, evaluación y seguimiento, otros)	1 global	LPI	450.000	100%		2002 II
Capacitación en negociación y manejo de conflictos para 40 funcionarios	2 cursos	LPRN	100.000	100%		2001 II
Fortalecimiento de capacidad comunicacional e informativa: implementación	1 global	LPI	250.000		100%	2001 II
II. DESARROLLO PRODUCTIVO						
CONSULTORIAS 1/						
Estudio de identificación y evaluación de inversiones	2 estudios	LPN	400.000		100%	2001 II
Estudio de efectividad y calidad de oferta de servicios de fomento productivo	1 global	LPN	140.000		100%	2002 II
III. COMPONENTE DE EDUCACION Y CULTURA						
EQUIPOS						
Equipamiento audiovisual	150 sets. Con: 3 computadoras, 1 impresora, 1 televisor, 1 video, 1 retroproyector y 1 filmadora	LPI	1.087.000		100%	2002 I, 2003
Equipamiento didáctico de Centros de Educación Rural de Adultos	3 Centros en la I, II y VIII Región	LPN	180.000	100%		2002 I y 2003
Equipamiento para televisión educativa	Antena, decodificador	LPN	205.000		100%	2002 I
Equipamiento informático y audiovisual UC	10 computadores, 2 impresoras laser, proyector Datashow, escáner	CP	28.870		100%	2001 II

MATERIAL EDUCATIVO						
Red radial de sensibilización (cultura y educación)	10 contratos y 3 al año	LPN	300.000	100%		2001 II; 2002 I y II
Difusión de materiales educativos	21.000 sets	LPN	189.000		100%	2002 I y II
Edición, edición y distribución de textos escolares	360.000 ejemplares	LPI	1.080.000		100%	2002 I
Edición de libro de cuentos intercultural	30.000 ejemplares	LPN	144.000		100%	2002 II
Edición de implementos deportivos, musicales y artes	600 sets	LPN	231.000		100%	2002 II
Edición de biblioteca de aula con material intercultural y	47.000 ejemplares	LPI	372.000		100%	2002 I
Edición de software para uso educativo	3 software y manuales de uso	CP	30.000		100%	2002 I
Edición de videos para enseñanza de contenidos indígenas	9 videos	LPN	153.000		100%	2000 I, 2001 I, 2002 I
Edición para difundir experiencias de proyectos educativos	10.000 ejemplares	LPRN	40.000		100%	2003 I
Edición para difundir sistematización de la experiencia	1 global	LPN	220.000		100%	2002 I
Edición y distribución de instrumentos (ex-ante ex-post)	3.000 ejemplares	CP	30.000	100%		2003 I
	12.000 ejemplares	LPRN	36.000		100%	2002 I
CONSULTORIAS 1/						
Edición de una Bienal de Arte y Cultura Indígena	1 evento	LPI	500.000	100%		2003 II
Edición de Análisis de curriculum de carreras pedagógicas	1 informe de resultados	LPRN	96.000		100%	2002 I
Edición sobre la calidad de los programas EIB y sus	1 informe de resultados	LPRN	40.000	100%		2002 I
Edición sobre uso y efectos de los textos escolares	1 informe de resultados	LPRN	60.000		100%	2002 II
Edición cualitativo sobre prácticas pedagógicas	1 informe de resultados	LPRN	96.000		100%	2001 I
Edición sobre contexto socio lingüístico	1 informe de resultados	LPRN	96.000		100%	2002 II
Edición evaluativo de los post grados y grados sobre EIB	1 informe de resultados	LPRN	48.000		100%	2002 II
Edición sobre descripción, selección e incorporación de los culturales indígenas	1 informe de resultados	LPRN	48.000		100%	2002 I
Edición del componente de Educación y Cultura	1 informe de resultados	LPRN	77.200		100%	
Edición sobre sistematización de experiencias existentes e	1 informe de resultados	LPRN	67.000		100%	2001 I
Edición sobre necesidades de jóvenes y adultos						
Edición sobre diseño, validación, procesamiento y análisis	4 informes de resultados	LPRN	76.000		100%	2002 I
Edición de resultados de pruebas de medición (línea de base)						
Edición de Diagnóstico de la situación curricular	1 informe de resultados	LPRN	76.800		100%	2001 I
Edición de capacitación a supervisores y técnicos de EIB	2 jornadas	CP	32.400		100%	2001 II
Edición de desarrollo curricular						
Edición regionales de evaluación	5 talleres	CP	25.000	100%		2003 I
Edición foro nacional de intercambio	1 encuentro	LPRN	45.000	100%		2002 I
Edición asistencia técnica para diseño y acompañamiento técnico	1 global	LPN	180.000		100%	2001 II
Edición seguimiento al centro intercultural de adultos de la IX	1 global	CP	30.000		100%	2002 II
Edición de monitores socioculturales para apoyo a	6 jornadas	LPN	112.500	100%		2001 II
Edición de seguimiento						

acional de capacitación de supervisores y EIB	1 global	CP	20.000	100%		2001 II
s regionales de evaluación: encuentros, apresto planificación (5)	5 encuentros	CP	30.000	100%		2001 II
ción de una estrategia y materiales de capacitación (adadamente 500 profesores)	1 global	LPN	135.000	100%		2001 II
s de capacitación anuales para profesores	20 jornadas	LPI	366.000	100%		2001 II
ación de profesores in situ para 20 microcentros	1 asistencia técnica	CP	35.000		100%	2001 II
de biblioteca de aula con material bilingüe	1 contrato	CP	28.800		100%	2001 II
IV. SALUD INTERCULTURAL						
CONSULTORIAS 1/						
ia comunicacional	1 global	LPI	500.000		100%	2002 I
V. ADMINISTRACION, AUDITORIAS Y ESTUDIOS						
EQUIPOS						
de computación	30 sets	LPRN	46.200		100%	2001 II
elefónica, conexiones, internet, etc.	7 unidades	LPRN	40.600		100%	2001 II
etas	6 unidades	LPRN	81.000		100%	2001 II
CONSULTORIAS 1/						
y propuesta de Mercadeo Social	1 contrato	LPN	150.000		100%	2001 II
comunicacionales y productos concretos	1 global	LPN	150.000		100%	2001 II
os con medios de difusión (radio, TV, etc.)	5 contratos	LPI	800.000		100%	2001 II
VI. ADMINISTRACION, AUDITORIAS Y ESTUDIOS						
CONSULTORIAS 1/						
líneas de base	1 consultoría	LPI	250.000		100%	2001 I
miento de prácticas de los funcionarios de los s públicos	1 consultoría	LPRN	60.000		100%	2002 I
satisfacción de usuarios	1 consultoría	LPI	300.000		100%	2002 I
ión de la Fase I	1 consultoría	LPI	230.000		100%	2003 I
ento del Programa	1 consultoría	LPI	320.000		100%	2001 II
e instalación del sistema de información	1 consultoría	LPRN	100.000		100%	2001 I
TOTAL						

PI Licitación pública internacional para licitaciones de servicios de consultoría superiores a US\$200 mil; para licitaciones de adquisición de bienes superiores a US\$350 mil. Se prevén licitaciones de ejecución de obras superiores a US\$5 millones.

Los montos por debajo de LPI se llevarán a cabo de acuerdo a las normas nacionales, y con los siguientes límites:

CP Comparación de Precios hasta US\$35 mil en licitaciones de servicios de consultoría y licitaciones de adquisición de bienes; US\$40 mil en licitaciones de obras.

LPRN Licitación Privada Nacional hasta US\$100 en licitaciones de servicios de consultoría y licitaciones de adquisición de bienes; US\$200 mil en licitaciones de obras.

LPN Licitación Pública Nacional hasta US\$200 mil para licitaciones de servicios de consultoría; hasta US\$350 mil para licitaciones de adquisición de bienes; hasta US\$5 millones para licitaciones de obras.

Existe la posibilidad que por razones de pertinencia cultural en el transcurso de la ejecución se determine la conveniencia del desglose de alguna actividad de consultoría en varias.

MARCO LÓGICO
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Programa				
Condiciones over el dentidad aymara, mapuche en e en los nico, ídico.	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas y de la institucionalidad pública. Desarrollo Productivo Educación y Cultura Salud intercultural 	<ul style="list-style-type: none"> 600 Comunidades Indígenas, a las que pertenecen aproximadamente 12.000 familias rurales atacameñas, aymaras y mapuches, fortalecidas y con actividades económicas agrícolas y no agrícolas diversificadas ejecutadas y con pertinencia cultural. 50% funcionarios públicos de instituciones participantes más sensibles y eficientes en relación a la temática indígena. 150 escuelas rurales con una educación más pertinente y mejores resultados educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de satisfacción de usuarios. Informes de evaluaciones del Programa de resultado e impacto Proyecto educativo institucional e informe de medición de resultados educativos Registro de utilización de servicios de salud. 	<p>Gobierno mantiene compromiso con las comunidades indígenas participantes en el Programa.</p> <p>No se generan conflictos con la población indígena que arriesguen la viabilidad del Programa.</p>
Fortalecimiento Institucional				
Comunidades indígenas desarrollo entidad gestión r la na en los es, dades en públicos ción a las ígenas adecuada ia	<ul style="list-style-type: none"> Promotores y OSC contratados por el Programa ofrecen cursos/talleres, asistencia técnica y legal a las comunidades para mejorar sus capacidades de gestión, desarrollo organizacional, liderazgo y resolución de conflictos entre otros. Capacitación y asistencia técnica a las asociaciones de productores indígenas Cursos intensivos ligados a experiencias de terreno para funcionarios públicos Formulación e implementación de una propuesta de fortalecimiento técnico y organizacional (administrativo y comunicacional) de la CONADI. 	<ol style="list-style-type: none"> 60% de los miembros de la comunidad participan en asambleas para elegir representantes y definir prioridades. <ul style="list-style-type: none"> Dirigentes de 500 comunidades han participado en cursos/talleres y han recibido asistencia legal y técnica para su autogestión 5 ADI con institucionalidad indígena constituida Procesos de planificación realizados y modelo de gestión construido en las 5 ADI 400 comunidades cuentan con PCD 40 asociaciones fortalecidas en su capacidad de formulación de proyectos, gestión y conocimiento de oferta pública 400 funcionarios públicos modifican sus prácticas laborales, considerando especificidades étnicas, culturales y tradiciones. <ul style="list-style-type: none"> 100% de los funcionarios de la CONADI, a nivel central y regional están capacitados y utilizan procedimientos e instrumentos con mayor pertinencia cultural 	<ul style="list-style-type: none"> Informes semestrales de la Secretaría Ejecutiva. Sistema de información del Programa. Evaluación de resultados de la primera fase. 	<p>Comunidades indígenas bien informadas sobre el Programa</p> <p>Comunidades se involucran y participan activamente en el diseño y ejecución de proyectos</p> <p>Funcionarios públicos de las comunidades son sensibles y están dispuestos a modificar sus prácticas</p> <p>CONADI logra con el modelo organizacional legitimidad frente a las comunidades indígenas y la sociedad en general</p>

IVIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Desarrollo Productivo				
<p>nera</p> <p>vida de</p> <p>ales</p> <p>meñas y</p> <p>avés del</p> <p>y</p> <p>de</p> <p>ónomicas</p> <p>agrícolas</p> <p>os</p> <p>ompatibles</p> <p>y</p>	<ul style="list-style-type: none"> Comunidades han definido su propia visión de desarrollo productivo sostenible de mediano plazo y han identificado proyectos. La ejecución de los proyectos contenidos en los PCDP han permitido incrementos significativos en el ingreso autónomo neto de los hogares beneficiados. Se han identificado opciones de inversión productiva que se promoverían en la fase 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 500 PP fueron presentados, revisados y aprobados en la primera fase <ul style="list-style-type: none"> 300 contratos de ejecución suscritos con comunidades que no tenían antes acceso a los programas de fomento productivos de INDAP, CONAF y CONADI Los PP involucraron a 12.000 familias indígenas y a 1.800 hogares encabezados por mujeres Un tercio de los beneficiarios tienen ingresos autónomos netos de por lo menos un 15% con respecto a aquellos que no fueron beneficiados por el Programa. Estudios realizados en ADI identificaron opciones de alto interés para inversionistas. 	<ul style="list-style-type: none"> Número de Convenios de Ejecución celebrados anualmente Datos consignados en los Convenios de Ejecución celebrados Comparación entre datos de ingreso de la línea de base y encuesta de tercer año. Resultado de estudios de prefactibilidad contratados. 	<p>La economía nacional reactivado y crece a un ritmo del orden del 5-6%</p> <p>Se ha validado el interés de inversionistas por parte de las zonas indígenas, al haberse minimizado los conflictos entre éstos y las comunidades indígenas.</p>
Educación y Cultura				
<p>trollar y</p> <p>trimonio</p> <p>pueblos</p> <p>ño y</p> <p>nciando</p> <p>ersidad</p> <p>ociedad</p> <p>mentar y</p> <p>opuesta</p> <p>ra el</p> <p>en</p> <p>ldad de</p> <p>s</p> <p>es al</p> <p>cional de</p> <p>eral básica</p> <p>Reforma</p> <p>n, en 150</p> <p>estudian</p> <p>le los</p> <p>a,</p> <p>apuche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se han financiado proyectos y propuestas que promueven y desarrollen la cultura y el arte indígena y que surgen de las propias comunidades. 150 escuelas rurales con un programa de educación intercultural bilingüe (PEIB) implementado. 	<ol style="list-style-type: none"> 180 proyectos implementados; Una Bienal de Arte y Cultura indígena realizada al término de la primera etapa; 80% de las 150 escuelas que imparten educación general básica con un Programa de Educación Intercultural implementado y con un aumento significativo en sus tasas de retención escolar (asistencia, repitencia y abandono). Aproximadamente 150 comunidades y 3000 familias indígenas incorporadas y aportando al proceso educativo de las 150 escuelas participantes del PEIB y con una mejor percepción respecto a la pertinencia y la calidad de los aprendizajes que estas escuelas promueven. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe con los proyectos seleccionados y adjudicados. Publicación con la sistematización de los resultados de esta experiencia. Estadísticas educacionales anuales. Nº de convenios de gestión firmados. Resultados de estudios e investigaciones. 	<p>El Depto. de Cultura y Educación de la C de Guatemala está dispuesta a conducir esta actividad para fortalecerá sus equipos a disposición su capacidad instalada.</p> <p>El Ministerio de Educación a través del División General (Programa de Coordinación) coordinará y orientará la actividad para lo cual sus equipos técnicos nacionales, regionales y locales.</p> <p>Los sostenedores y las 150 escuelas se comprometen a la actividad PEIB.</p>

VO	ACTIVIDADES	INDICADORES VERIFICABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Salud				
ón de ación nte la as es y el eso cios	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y validación de modelos interculturales de atención y gestión en salud. Capacitación y sensibilización de funcionarios de los servicios para mejorar la calidad, sensibilidad y pertinencia cultural de servicios de salud en territorio indígena. Fortalecimiento de la medicina indígena. Mejoramiento del acceso y capacidad resolutive de la red de servicios interculturales. 	<ol style="list-style-type: none"> Modelos y protocolos interculturales de atención y gestión replicables han sido desarrollados y validados 12.500 funcionarios capacitados <ul style="list-style-type: none"> Incremento del 30% en nivel de satisfacción usuarios indígenas Aumento del 30% por año en utilización de servicios y establecimientos participantes Mejora la atención en el 80% de los establecimientos (incorporan elementos de atención intercultural) 1.000 funcionarios capacitados en la comprensión de la lengua y cultura indígena. Programa de inducción elaborado Propuesta curricular intercultural elaborada 20 proyectos presentados, aprobados y ejecutados; encuentros territoriales realizados. Hasta 300 proyectos de adecuación intercultural aprobados y ejecutados <ul style="list-style-type: none"> Prestaciones mejoradas para 50% de la población en 44 comunas prioritarias 	<ol style="list-style-type: none"> Documentación de modelos y validación Encuestas de satisfacción de usuarios <ul style="list-style-type: none"> Registros de utilización de servicios Documentación de propuestas Documentación de proyectos Informes de proyectos y documentación <ul style="list-style-type: none"> Encuestas de utilización de servicios 	<p>Política de salud inter Ministerio de Salud s Experiencias pilotos s</p> <p>Apoyo de personal di servicio en establecim atienden población in</p> <p>Propuestas de atenció basan en experiencia</p> <p>Agentes indígenas y están interesados en p presentar proyectos p fortalecimiento.</p> <p>Población y agentes i generan demanda de</p>